



BOLETÍN OFICIAL

PROVINCIA DE SANTANDER

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

EDITA:
EXCELENTÍSIMA DIPUTACION
PROVINCIAL DE SANTANDER

DEP. LEG., SA. 1. 1958
IMPRESA PROVINCIAL
GENERAL DAVILA, 83
SANTANDER, 1976

INSCRITO EN EL REGISTRO DE PRENSA
SECC. PERSONAS JURIDICAS:
TOMO 13, FOLIO 202, NUM. 1.003

Año XL

Viernes, 16 de enero de 1976. — Número 7

Página 81

ADMINISTRACION PROVINCIAL

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SANTANDER

A tenor de las disposiciones vigentes sobre oposiciones y concursos de los funcionarios públicos, se anuncia a continuación la composición del Tribunal nombrado para juzgar el concurso-oposición convocado para proveer en propiedad una plaza de asesor-agropecuario, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, según anuncios insertos en los «Boletines Oficiales del Estado» y de la provincia correspondientes a los días 21 y 18 de agosto de 1975, respectivamente:

Presidente: El Ilmo. Sr. presidente de la Corporación Provincial. Suplente: D. Angel Badiola Argos, diputado de la Corporación Provincial, presidente de la Comisión de Personal de la misma.

Vocales: Ilmo. Sr. D. Belarmino García García, jefe provincial del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, en representación de la Dirección General de Administración Local. Suplente: D. José Merino Vellisco, jefe de sección del Gobierno Civil.

D. Juan José Jordá Catalá, profesor agregado de la Facultad de Medicina, en representación del Profesorado Oficial del Estado. Suplente: D. Miguel Angel Lafarga Coscojuela, profesor agregado de la Facultad de Medicina.

D. Fernando Arce García, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, en representación del mismo. Suplente: D. Vicente de la Hera Llorente, vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios.

SUMARIO

ADMINISTRACION PROVINCIAL

Excma. Diputación Provincial de Santander

Tribunal para juzgar el concurso de la plaza de asesor agropecuario 81

“BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO”

Ministerio de la Gobernación

Orden de 11 de noviembre de 1975 determinando la constitución de la Junta de Compras de Correos 81

Ministerio de Hacienda

Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado ... 82

ANUNCIOS OFICIALES

Delegación Provincial del Ministerio de Industria 103

Inspección de Trabajo 103

Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda 104

Jefatura de Carreteras 104

Juntas Municipales del Censo Electoral de: Santander, Ruesga, S. V. de la Barquera, Liérganes y M. Cudeyo 104

ANUNCIOS DE SUBASTA

Excma. Diputación Provincial 107

Ayuntamiento de Reocín 108

Ayuntamiento de Molledo ... 109

Ayuntamiento de Villaverde de Trucíos 109

Junta Vecinal de Argomilla de Cayón 109

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Providencias judiciales 110

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Ayuntamientos de: Santander, Piélagos, Medio Cudeyo, Reinosa y Los Corrales de Buelna 111

Secretario: D. Ricardo Alonso Fernández, secretario general de la Diputación de Santander. Suplente: D. Víctor Manuel Luna Lastra, técnico de Administración General.

Se hace público el Tribunal designado para calificar los ejercicios y juzgar los méritos de los aspirantes a dicha plaza, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.º del Decreto de 27 de junio de 1968 sobre Reglamentación General para ingreso en la Administración Pública.

Dicho Tribunal se constituirá, a tal efecto, en el Palacio de la Corporación Provincial de Santander, a las diez horas y treinta minutos del día nueve de febrero del presente año.

Santander, 9 de enero de 1976. El presidente en funciones (ilegible).—El secretario general, Ricardo Alonso Fernández.

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORDEN de 11 de noviembre de 1975 por la que se determina la constitución de la Junta de Compras de Correos y Telecomunicación.

Ilmo. Sr.: El Decreto 2869/1975, de 31 de octubre, por el que se fusionan las Juntas de Compras de Correos y Telecomunicación, en su disposición final primera, faculta al Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del mismo.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º La Junta de Compras de Correos y Telecomunicación quedará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Director general de Correos y Telecomunicación.

Vicepresidente: Secretario general de Correos y Telecomunicación.

Vocales: El Abogado del Estado y el Interventor Delegado de la Intervención General de la Administración del Estado en la Dirección General de Correos y Telecomunicación; los Subdirectores generales de Correos, de Telecomunicación, de Servicios Técnicos de Telecomunicación y de Administración Económica; el ingeniero jefe de la Sección de Ingeniería Industrial, y los Jefes de las Secciones de Adquisiciones y Material de Correos y de Telecomunicación.

Secretario: Un Jefe de Negociado de la Sección de Adquisiciones y Material de Correos o de Telecomunicación, libremente designado por el Director general, Presidente de la Junta.

Art. 2.º El Presidente podrá disponer la asistencia a las sesiones de la Junta de aquellas personas al servicio de la Dirección General especialmente capacitadas en las materias o asuntos a tratar.

Art. 3.º La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Art. 4.º Quedan derogadas las Ordenes de 17 de diciembre de 1946 y 11 de febrero de 1948, por las que se determina la composición de las Juntas de Compras de Telecomunicación y de Correos, respectivamente, y cuantas otras de igual o inferior rango se opongan a lo que se establece en esta Orden.

Lo que comunico a V. I.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 11 de noviembre de 1975.

GARCIA HERNANDEZ

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

(Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre de 1975.)

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado.

La Ley cinco/mil novecientos setenta y tres, de diecisiete de marzo, de modificación parcial de la Ley de Contratos del Estado, introdujo determinados cambios e innovaciones en la normativa de este texto legal que hace necesario incorporar consecuentes modificaciones en el Decreto tres mil trescientos cincuenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de veintiocho de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Contratación del Estado. Ha parecido oportuno además actualizar numerosos preceptos de este cuerpo legal recogiendo los perfeccionamientos aconsejados por la experiencia de su aplicación, razón por la cual se ha estimado conveniente aprobar una nueva versión completa del Reglamento General, en la que se sigue la técnica legislativa de la anterior, transcribiendo los preceptos de la Ley seguidos de su desarrollo reglamentario para facilitar el estudio y aplicación de la normativa vigente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de conformidad con el texto elaborado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de noviembre de mil novecientos setenta y cinco,

DISPONGO:

Artículo único.—Se aprueba el Reglamento General para la aplicación y desarrollo de la Ley de Contratos del Estado, modificada por la Ley cinco/mil novecientos setenta y tres, de diecisiete de marzo, cuyo texto se inserta a continuación.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS

El Ministro de Hacienda,
RAFAEL CABELLO DE ALBA Y GRACIA

REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACION DEL ESTADO

TITULO PRELIMINAR

De los contratos del Estado

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º «Los contratos que celebre la Administración del Estado con personas naturales o jurídicas se ajustarán a las prescripciones contenidas en la Ley de Contratos del Estado, en el presente Reglamento y en sus disposiciones complementarias» (artículo 1 L. C. E.).

Art. 2.º No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, quedan fuera del ámbito de la presente legislación los siguientes contratos y negocios jurídicos de la Administración:

1. La relación de servicios y los contratos sobre personal regulados en la legislación sobre funcionarios y, en su caso, en la laboral.

2. Las relaciones jurídicas de prestación reglamentaria, entendiéndose por tales aquellos negocios que, bajo la forma de cualquier tipo contractual, se celebren entre la Administración y los particulares como consecuencia de la prestación de un servicio público que los administrados tienen la facultad de utilizar mediante el abono de una tarifa o tasa de aplicación general a personas indeterminadas.

3. Las operaciones que celebre la Administración con los particulares sobre bienes o derechos cuyo tráfico resulte mediatizado en virtud de disposiciones legales o sobre productos intervenidos, estancados o prohibidos.

4. Los convenios de cooperación que celebre la Administración con las Corporaciones Locales u otros entes de Derecho público.

5. Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados extranjeros o con Entidades de Derecho público internacional.

6. Los contratos del Estado que se celebren y ejecuten en territorio extranjero.

7. Los convenios de colaboración que, en virtud de autorización del Gobierno, celebre la Administración con particulares y que tengan por objeto fomentar la realización de actividades económicas privadas de interés público.

8. Los exceptuados expresamente por una Ley (artículo 2 Ley de Contratos del Estado).

Art. 3.º Los expresados contratos y negocios jurídicos excluidos del ámbito de la presente legislación seguirán regulándose por sus normas peculiares, aplicándoseles los principios de la Ley de Contratos para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. Sin embargo, a los convenios a que se refiere el apartado 7 del artículo anterior se les aplicarán supletoriamente las reglas sobre preparación, adjudicación y efectos del contrato de gestión de servicios públicos (art. 2 L. C. E.).

Deberán aplicarse preferentemente como principios de la Ley de Contratos del Estado las reglas comunes que contiene el capítulo II del título preliminar de aquélla, referente a los contratos administrativos de obras, gestión de servicios y suministros.

Art. 4.º La Administración podrá concertar los contratos, pactos o condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y deberá cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, en favor de aquélla (artículo 3 L. C. E.).

Art. 5.º A efectos de la determinación del régimen jurídico aplicable a los contratos, éstos se clasifican en:

1.º Contratos administrativos de obras, gestión de servicios públicos y suministros.

2.º Contratos administrativos especiales.

3.º Contratos privados de la Administración.

Art. 6. Los contratos cuyo objeto directo sea la ejecución de obras y la gestión de servicios públicos del Estado, así como la prestación de suministros al mismo, tienen el carácter de administrativos, y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento General y, supletoriamente, por las restantes normas del Derecho administrativo. En defecto de este último, serán de aplicación las normas del Derecho privado (artículo 4 L. C. E.).

Art. 7. Los contratos administrativos especiales, es decir, los distintos de los enunciados en el artículo anterior que tengan carácter administrativo, se regirán, en cuanto a su preparación, competencia, adjudicación, efectos y extinción, por sus normas especiales; en su defecto, y por analogía, por las disposiciones de la presente legislación relativa a los contratos de obras, gestión de servicios y suministros y, finalmente, por las demás normas del Derecho administrativo. En defecto de este último, serán de aplicación las normas del Derecho privado.

A los expresados efectos, tendrán carácter administrativo especial los siguientes contratos de la Administración:

1. Los de contenido patrimonial, de préstamo, depósito, transporte, arrendamiento, sociedad y cualesquiera otros cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes:

- Que así lo declare expresamente una Ley.
- Que esté directamente vinculado al desenvolvimiento regular de un servicio público.
- Que revista características intrínsecas que hagan precisa una especial tutela del interés público para el desarrollo del contrato.

2. Los de asistencia con Empresas consultoras o de servicios a que se refiere el Decreto número 1005/1974, de 4 de abril.

3. Los forestales regulados por la legislación de montes con este carácter.

4. Los de transporte de correos, personal, material, artículos o efectos militares u otros bienes o valores del Estado.

Art. 8. Los contratos privados de la Administración se regirán:

a) En cuanto a su preparación, competencia y adjudicación, por sus normas administrativas especiales y, en su defecto, por las disposiciones de la Ley de Contratos y de este Reglamento sobre preparación y adjudicación de los contratos de obras, gestión de servicios públicos y suministros, que se aplicarán por analogía a la figura contractual de que se trate. En su defecto, se aplicarán las normas del Derecho administrativo.

b) En cuanto a sus efectos y extinción, por las normas del Derecho privado que les sean aplicables en cada caso, en defecto de sus normas especiales, si las hubiere.

Tendrán la consideración de contratos privados de la Administración:

1. Los de compraventa de inmuebles y muebles, permuta, arrendamiento, donación y demás a que se refiere la Ley del Patrimonio del Estado, en los que no concurran alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo anterior.

2. Los típicos del Derecho civil y mercantil, que, por no hallarse incluidos en los supuestos previstos en los artículos 6 y 7, no deban tener carácter administrativo.

3. Aquellos cuyo carácter no pueda deducirse de las normas establecidas en los expresados artículos 6 y 7, en cuyo caso la presunción está en favor de su carácter privado.

Art. 9. A los efectos establecidos en el artículo 7 y apartado a) del artículo 8, se consideran normas administrativas especiales reguladoras de determinados contratos del Estado las Leyes y Decretos, así como las disposiciones dictadas en su desarrollo, que sean de obligado cumplimiento para los órganos de la Administración al tiempo de celebrar aquéllos.

Art. 10. Son reglas generales sobre preparación, competencia y adjudicación aplicables a todos los contratos del Estado, salvo que sus normas administrativas especiales dispongan lo contrario, las siguientes:

1. La necesidad de consignación presupuestaria previa, si el contrato origina gastos para el Estado.

2. La competencia general para celebrarlo de los Jefes de los Departamentos o Autoridad en quien se delegue o desconcentre la función.

3. La preparación mediante expediente, donde constarán las cláusulas administrativas y técnicas del contrato a celebrar y la aprobación del gasto, en su caso.

4. La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, relativos a los contratos.

5. La adjudicación del contrato atendiendo a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que esto no sea posible o conveniente a los intereses públicos.

6. La formalización del contrato en documento notarial o administrativo.

Art. 11. Cuando la legislación referente a los contratos administrativos de obras, gestión de servicios y suministros deba funcionar como supletoria, habida cuenta del carácter del contrato, de conformidad con el artículo 7 de este Reglamento, deberá el órgano de contratación incluir en el mismo las cláusulas pertinentes declaratorias de aquel carácter y de las prerrogativas administrativas, y, en especial, de las siguientes:

1. La necesidad de que el contratista preste garantías o fianzas para asegurar el cumplimiento de su obligación.

2. Las facultades de la Administración, una vez celebrado el contrato, en orden a su interpretación, modificación y resolución.

3. La competencia de la Jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de las cuestiones que puedan plantearse de conformidad con su Ley reguladora.

Art. 12. En los contratos a que se refiere el artículo 8 deberá el órgano de la Administración proponer, en cada caso, la inclusión de las cláusulas más convenientes a los fines administrativos a que sirve el contrato, las cuales tendrán los efectos que determine el Derecho civil o mercantil.

Art. 13. Cuando se trate de contratos que carezcan en el ordenamiento jurídico de régimen específico, como los atípicos o innominados, deberán cumplirse en todo caso las reglas generales sobre preparación, competencia y adjudicación indicadas en el artículo 10, y se ejercerán, además, las prerrogativas administrativas cuando, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 7 de este Reglamento, el contrato tenga carácter administrativo.

Art. 14. La jurisdicción civil será la competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos cuyos efectos estén sometidos al Derecho privado. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la preparación, competencia y adjudicación del contrato, y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Los actos administrativos separables podrán también ser anulados de oficio, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.

La anulación de tales actos llevará consigo la del contrato, que entrará en fase de liquidación sin necesidad de plantear proceso ante la Jurisdicción civil.

Art. 15. La preparación y la ejecución de los contratos de la Administración se desarrollarán bajo la dirección y la responsabilidad de la Autoridad o del órgano que los celebre. Los particulares podrán deducir contra los actos y las resoluciones de aquél las acciones, reclamaciones y recursos autorizados por las Leyes que sean aplicables (artículo 5 L. C. E.).

Las referencias que en el presente Reglamento se contengan a la Administración como parte contratante, a la Autoridad competente, al órgano que celebró el contrato u otros análogos, se entenderán asimismo hechas, salvo que del propio sentido resulte lo contrario, al órgano de contratación correspondiente.

CAPITULO II

LA FISCALIZACION DEL GASTO EN LA CONTRATACION

Art. 16. La fiscalización del gasto público originado por la contratación será ejercida, bajo las directrices generales del Ministro de Hacienda, por la Intervención General de la Administración del Estado y sus Interventores Delegados, de acuerdo con la Ley de Presupuestos y las normas que sean de aplicación (artículo 5 L. C. E.).

Art. 17. Corresponderá a los órganos enunciados en el artículo anterior emitir, en el ejercicio de sus funciones, sus preceptivos informes, en los supuestos contemplados en los artículos 22, 88, 117 números 7, 8 y 9; 133, 144, 152 y 157 de este Reglamento, como asimismo en los expedientes motivados por contratos en general, en los que se proponga el reconocimiento de derechos u obligaciones de contenido económico o la adopción de acuerdos de los cuales se deriven aquéllos, con sujeción a las disposiciones al efecto aplicables.

Es competencia igualmente de la Intervención la fiscalización material de las inversiones realizadas como consecuencia de los contratos, de acuerdo con sus normas privativas.

Art. 18. El Ministro de Hacienda, conservando copia certificada, pasará al Tribunal de Cuentas para su examen y toma de razón los contratos que se celebren por la Administración, cuyo importe inicial exceda de cinco millones de pesetas, que deberán remitirle a este fin los órganos de contratación.

Sin perjuicio de la facultad del Tribunal de Cuentas para recabar todos los antecedentes que estime necesarios, los citados órganos de contratación deberán acompañar a los contratos originales, dentro de los tres meses siguientes a su formalización, copia o fotocopia certificada de las siguientes actuaciones:

A) Las indicadas en los artículos 76, 84 y 85 del presente Reglamento.

En los casos que corresponda, deberá acompañarse la resolución establecida en el párrafo primero del artículo 90; la justificación de las provisiones a que aluden los artículos 79 y 80 y la de las necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas a que se refiere el artículo 149, todos ellos del propio texto reglamentario.

B) Relación de las ofertas recibidas, autorizada por el Registro del órgano de contratación.

C) El acuerdo de admisión previa, según las condiciones especiales exigidas en los concursos-subasta y concursos restringidos.

D) Acta de la Mesa de Contratación, en la que conste el resultado de la licitación, con expresión del «Boletín Oficial del Estado» en que se publicó la convocatoria, y adjudicación provisional en las subastas y concursos-subasta, así como propuesta de adjudicación de los concursos.

E) Para los casos de contratación directa, en los supuestos que proceda con arreglo a la Ley, copia análoga a las anteriores comprensiva de las invitaciones formuladas, como mínimo, a tres Empresas capacitadas para la realización de las obras o suministros, así como de las contestaciones recibidas debidamente registradas en el órgano correspondiente.

F) Resolución de la adjudicación definitiva por el órgano competente, y

G) Indicación del «Boletín Oficial del Estado» en que se publicó la adjudicación definitiva.

Si el Tribunal observase infracciones legales en los expedientes se estará a lo previsto en el último párrafo del artículo 8 de la Ley de Contratos del Estado.

LIBRO PRIMERO

TITULO PRIMERO

Disposiciones comunes a los contratos administrativos de obras, gestión de servicios y suministros

CAPITULO PRIMERO

REQUISITOS ESENCIALES PARA SU VALIDEZ

Art. 19. Los Jefes de los Departamentos ministeriales son los órganos de contratación del Estado y están facultados para celebrar en su nombre los contratos a que se refiere el presente capítulo, dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin y con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento General.

No obstante, dichas atribuciones podrán ser objeto, en función de las conveniencias de cada servicio, de desconcentración mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros en otros órganos centrales o territoriales, que quedarán en su virtud constituidos en órganos de contratación del Estado con las facultades que les atribuye la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento General.

Las indicadas atribuciones podrán también ser objeto de delegación (artículo 7 L. C. E.).

Art. 20. Salvo que las normas de delegación de ejercicio de las facultades contractuales en los órganos centrales o territoriales dispongan otra cosa, la facultad para celebrar contratos lleva implícita la de aprobación del proyecto y del gasto correspondiente, la aprobación del pliego de cláusulas, la adjudicación del contrato, la de formalización del mismo, así como todas las demás facultades que la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento atribuyen al órgano de contratación.

La desconcentración de facultades se entenderá siempre que es completa, salvo que el oportuno Decreto establezca limitaciones.

Art. 21. No obstante lo dispuesto en el artículo 19 será necesario acuerdo del Consejo de Ministros autorizando la celebración en los siguientes casos:

1. Cuando los contratos tengan un plazo de ejecución superior al de vigencia del presupuesto correspondiente y hayan de comprometerse fondos públicos de futuros ejercicios fuera de los límites establecidos en la propia Ley de Presupuestos.

2. Cuando el presupuesto del contrato exceda de cien millones de pesetas.

La autorización del Consejo de Ministros llevará implícita la aprobación del gasto correspondiente (artículo 8 L. C. E.).

Art. 22. En el supuesto contemplado en el número 1 del artículo anterior, el Jefe del Departamento que vaya a celebrar el contrato vendrá obligado, con anterioridad a la autorización del gasto, a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos o en la Ley de Administración y Contabilidad, en su caso, sin perjuicio de lo establecido en Leyes especiales.

Art. 23. Están facultados para contratar con la Administración las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias siguientes:

1. Haber sido condenadas mediante sentencia firme o estar procesadas por delitos de falsedad o contra la propiedad.

2. Estar declaradas en suspensión de pagos, incursas en procedimiento de apremio como deudoras del Estado o de sus Organismos autónomos o haber sido objeto de sanción firme en dos o más expedientes tributarios por defraudación. En este último caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha en que sea firme la sanción del último expediente.

3. Haber sido sancionadas con carácter firme, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, por infracción administrativa en materia de disciplina del mercado. La prohibición de contratar tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha en que sea firme la sanción impuesta.

4. Haber sido declarados en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados, o insolventes fallidos en cualquier procedimiento.

5. Haber dado lugar, por causa de la que fueren declaradas culpables a la resolución firme, durante los cinco años anteriores, de cualquier contrato que hubiesen celebrado con el Estado, sus Organismos autónomos o las Entidades Locales.

6. Formar parte del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Administración Local, de los Organismos autónomos o de las Empresas públicas.

7. Las Empresas o Sociedades de las que formen parte las autoridades declaradas incompatibles con arreglo al Decreto-ley de 13 de mayo de 1955 y demás disposiciones aplicables.

8. No hallarse debidamente clasificadas, en su caso, con arreglo a lo dispuesto en la presente legislación.

No obstante, serán de aplicación a las Empresas extranjeras las normas de ordenación de la industria y las que rigen las inversiones de capital extranjero. El Gobierno, en atención a la coyuntura económica, podrá regular la concurrencia de las Empresas extranjeras a las licitaciones mediante disposiciones de carácter general y por un tiempo determinado.

Las adjudicaciones de contratos en favor de personas que carezcan de la capacidad de obrar necesaria o que estén incursas en cualquiera de las prohibiciones del presente artículo serán nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de ello, el órgano de contratación podrá acordar que el empresario continúe la ejecución del contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público correspondiente (artículo 9 L. C. E.).

A efectos de las prohibiciones para contratar originadas por las causas a que se refiere este artículo, y en relación con los contratistas clasificados, las Autoridades y órganos competentes notificarán a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa todas las sanciones y resoluciones firmes recaídas en los procedimientos correspondientes para que, a la vista de los mismos, se declare por la expresada Junta lo que proceda en el ámbito de la clasificación.

Art. 24. Sin perjuicio de lo que establezcan las normas de coyuntura sobre estos particulares, las Empresas extranjeras que pretendan contratar con el Estado deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Tener plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país.

2. Que el país de procedencia de la Empresa extranjera admita a su vez la participación de Empresas españolas en la contratación con el Estado en forma sustancialmente análoga,

por lo menos, a la que establezcan las normas de coyuntura. Este requisito se acreditará mediante el informe de la Embajada de España respectiva, que se acompañará a la documentación.

3. Que la Empresa extranjera, si se trata de contratos de obras, tenga abierta una sucursal domiciliada en España y designe nominalmente los apoderados o representantes de la misma para sus operaciones y que previamente haya obtenido las autorizaciones administrativas que reglamentariamente procedan para llevar a cabo en el territorio nacional la inversión de capital extranjero que la creación de tal sucursal representa.

4. Que la Empresa, si se trata de contratos de obras, esté inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos referidos, y en el Registro Industrial del Ministerio de Industria.

5. Que la Empresa, en su proposición, haga declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los Tribunales españoles, civiles, penales, laborales y contencioso-administrativos para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato.

Art. 25. La personalidad de las Empresas se acreditará ante la Administración del siguiente modo:

1. Si la Empresa fuese persona jurídica, mediante la presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Para las Empresas individuales será obligatorio la presentación del documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

2. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto. Si la Empresa fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3. Las Empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos al castellano por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como un despacho expedido por la Embajada de España en el país respectivo donde se certifique que, conforme a su legislación, tiene capacidad para contratar y obligarse.

4. Si para optar a un contrato de obra o de suministro fuese precisa la clasificación deberá presentarse, adjunto a la proposición, el certificado acreditativo de aquélla, según prevé el capítulo correspondiente de este Reglamento. La presentación del certificado tendrá los efectos probatorios de la personalidad que allí se estableció.

Los documentos citados en este artículo podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente.

Art. 26. La Administración también podrá contratar con agrupaciones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración y deberán nombrar un representante o Gerente único de la Agrupación, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven (artículo 10 L. C. E.).

Art. 27. Cuando varias Empresas acudan a una licitación constituyendo una agrupación temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar conforme establecen los artículos anteriores.

Para que sea eficaz la agrupación frente a la Administración, bastará que en el escrito de proposición se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que se designe la persona o Entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración.

Si la agrupación estuviere constituida por Empresas españolas y extranjeras, el Gerente deberá ser español.

Art. 28. El objeto de los contratos deberá ser determinado, y su necesidad para los fines del servicio público correspondiente se justificará en el expediente de contratación, que también incluirá el presupuesto del gasto (artículo 11 L. C. E.).

Art. 29. Podrán celebrarse contratos con pluralidad de objeto, pero cada una de las prestaciones deberá ser definida con independencia de las demás.

No podrán celebrarse contratos en los cuales la prestación del empresario quede condicionada a resoluciones e indicaciones administrativas posteriores a su celebración, salvo lo establecido en este Reglamento para el contrato de suministro.

Art. 30. Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que se expresará en moneda nacional, y se abonará al empresario en función de la importancia real de la prestación efectuada y de acuerdo con lo convenido.

La financiación de los contratos por la Administración se ajustará al ritmo óptimo de la ejecución de la prestación, debiendo adoptarse a este fin, por los órganos de contratación, las medidas que sean necesarias al tiempo de la programación de las anualidades y durante el periodo de ejecución, de conformidad con la Ley de Presupuestos.

Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos, salvo que una Ley lo autorice expresamente.

La inclusión de cláusulas de revisión de precios se regulará por su legislación especial.

En todo caso, los órganos de contratación cuidarán de que el precio de los contratos sea adecuado al mercado (artículo 12 L. C. E.).

Art. 31. Cuando las condiciones establecidas en el contrato impliquen pagos en moneda extranjera habrá de expresarse, además de su precio total en moneda nacional, el importe máximo de aquéllas y la clase de divisas de que se trate, siendo preceptivo en estos casos y previamente a su adjudicación informe del Banco de España sobre disponibilidad de las divisas que en un plazo máximo de quince días deberá manifestar su conformidad o reparos.

No será preceptivo el anterior informe cuando los pagos en moneda extranjera estén previstos en los Presupuestos Generales del Estado.

Art. 32. Los contratos a que se refiere el presente título se celebrarán, salvo las excepciones establecidas por la legislación de Contratos del Estado, bajo los principios de publicidad y concurrencia; no se entenderán perfeccionados hasta su aprobación por el órgano de contratación competente y se formalizarán en documento público (artículo 13 L. C. E.).

La aprobación de los contratos se verifica por el acto administrativo de adjudicación y no produce sus efectos respecto a las Empresas interesadas, sino desde la notificación de la resolución.

Art. 33. Salvo las excepciones, también establecidas por la Ley de Contratos del Estado, será requisito necesario la prestación por el empresario de las fianzas previstas en la misma como garantía de los intereses públicos (artículo 13 L. C. E.).

CAPITULO II

DE LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS Y PRESCRIPCIONES

Art. 34. Deberán aprobarse con anterioridad a la perfección y, en su caso, a la licitación de todo contrato, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de explotación o de bases, que incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y las obligaciones que asumirán las partes del contrato. Las declaraciones contenidas en estos pliegos no podrán ser modificadas por los correspondientes contratos, salvo lo que se dispone en la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento General.

La aprobación de dichos pliegos corresponde al órgano de contratación competente (artículo 14 L. C. E.).

Art. 35. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares contendrán aquellas declaraciones que sean específicas del contrato de que se trate, y de su forma de adjudicación, las nuevas que se precisen por no figurar en el pliego de cláusulas administrativas generales que resulte de aplicación o estar en contradicción con alguna de ellas, y las que figurando en aquél no hayan de regir por causa justificada en el contrato de que se trate.

Los requisitos específicos de estos pliegos se regularán por lo establecido en este Reglamento para cada caso.

Art. 36. No obstante lo dispuesto en el artículo 34, la Administración deberá establecer pliegos de cláusulas administrativas generales en que se contengan las típicas a que, en principio, se acomodará el contenido de los contratos regulados en este título.

La aprobación de estos pliegos generales compete al Gobierno con el informe previo y preceptivo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y el dictamen del Consejo de Estado.

La propuesta de dichos pliegos corresponderá al Departamento competente por razón de la materia a que aquéllos se refieran y deberá ser informada, en todo caso, por la Asesoría Jurídica del Ministerio de que se trate.

El Gobierno podrá establecer, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y dictamen del Consejo de Estado, que determinados pliegos de cláusulas administrativas generales sean de elaboración y propuesta conjunta por varios Departamentos ministeriales y que pliegos ya aprobados se apliquen a la contratación de otros Ministerios (artículo 15 L. C. E.).

Art. 37. Los pliegos de cláusulas administrativas generales contendrán las declaraciones jurídicas, económicas y administrativas, que serán de aplicación, en principio, a todos los contratos de un objeto análogo además de las establecidas en la legislación de Contratación del Estado.

Los pliegos se referirán a los siguientes aspectos de los efectos del contrato:

1. Ejecución del contrato y sus incidencias.
2. Derechos y obligaciones de las partes, régimen económico.
3. Modificaciones del contrato, supuestos y límites.
4. Resolución del contrato.
5. Conclusión del contrato, recepciones, plazo de garantía y liquidación.

Los pliegos particulares sólo podrán modificar los generales conforme al artículo siguiente.

Art. 38. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa informará con carácter previo y preceptivo todos los pliegos particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a lo previsto en los correspondientes pliegos generales (artículo 18 L. C. E.).

Art. 39. Serán elaborados, también con anterioridad a cada contrato, los pliegos de prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la ejecución de la prestación de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la legislación de Contratos del Estado.

La aprobación de estos pliegos corresponde al órgano de contratación competente.

El Gobierno podrá establecer, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, los pliegos de prescripciones técnicas generales a que haya de ajustarse la prestación a contratar por la Administración (artículo 17 L. C. E.).

CAPITULO III

DE LA INVALIDEZ DE LOS CONTRATOS

Art. 40. Los contratos regulados en el presente Libro serán inválidos cuando lo sean los actos administrativos que les sirven de soporte o alguno de ellos, o cuando la invalidez derive de su propio clausulado.

Estos contratos pueden quedar también invalidados por las causas reconocidas en el Derecho civil.

Art. 41. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos preparatorios o el acto de adjudicación, en los siguientes casos:

- a) Cuando incurran en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
- b) Las adjudicaciones realizadas en favor de empresarios que se encuentren incurso en alguna de las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado.
- c) Las adjudicaciones de contratos que carezcan de consignación presupuestaria o extrapresupuestaria debidamente aprobada.

Art. 42. La nulidad de pleno derecho se acordará de oficio o a instancia de parte interesada.

El acuerdo de nulidad compete al Jefe del Departamento que haya aprobado el contrato, previo dictamen favorable del Consejo de Estado y mediante Orden ministerial publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Si el Consejo de Ministros hubiese autorizado el contrato, deberá también autorizar al Jefe del Departamento competente para que proceda a su anulación.

Art. 43. En caso de grave trastorno para los servicios públicos, podrá acordar el Jefe del Departamento, en la Orden ministerial de declaración de nulidad de pleno derecho, la continuación, bajo las mismas cláusulas, de los efectos del contrato hasta que el órgano competente haya podido adoptar las medidas conducentes a evitar aquel perjuicio.

Art. 44. Son anulables los actos administrativos preparatorios o el acto de adjudicación que se hallen incurso en alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Infracción del ordenamiento jurídico y, en especial, de las reglas contenidas en la Legislación de Contratos del Estado, de conformidad todo ello con el artículo 48 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo.
- b) Que incurran en defectos de fondo que afecten a los elementos esenciales del contrato, de modo que se deduzca razonablemente que, de no haber existido aquéllos, el órgano

de contratación no debería haber realizado la adjudicación o la hubiere debido hacer en favor de distinto empresario.

El incumplimiento de meros requisitos formales en las actuaciones preparatorias del contrato o en la propia adjudicación no darán en general lugar a la anulación, y sólo faculta al órgano de contratación para subsanarlos.

Art. 45. Si los referidos actos administrativos incurren en manifiesta infracción del ordenamiento jurídico, el Jefe del Departamento competente podrá anularlos de oficio ajustándose a los requisitos establecidos en el artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La anulación se hará mediante Orden ministerial publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y requerirá autorización del Consejo de Ministros cuando este órgano hubiera otorgado la correspondiente para la celebración de aquél.

Art. 46. La anulación de los contratos por las causas previstas en el artículo 44 podrá ser instada por la Administración o los interesados, conforme a los requisitos y plazos establecidos en las normas generales de procedimiento administrativo.

Cuando la Administración pretenda la anulación, deberá previamente el Jefe del Departamento declararlo lesivo para el interés público e impugnarlo ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. Hasta que ésta no apruebe, en su caso, la anulación del contrato, seguirá produciendo éste todos sus efectos.

Art. 47. La anulación por cualesquiera de las causas señaladas de los actos separables previos al contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo las partes restituirse recíprocamente las cosas que hubieren recibido en virtud del mismo, y si esto no fuese posible se devolverán su valor. La parte que haya sido culpable de la anulación, en su caso, deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.

Durante la tramitación del expediente de anulación el órgano de contratación podrá suspender la ejecución del contrato.

Art. 48. La invalidez de los contratos originada por vicios sustanciales en el contenido del mismo, bien por incluir cláusulas esenciales contrarias a derecho o al interés público, requerirá la previa declaración de lesividad por la Administración y la ulterior impugnación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de su Ley reguladora.

Si la impugnación del contrato se pretende por los particulares interesados, deberán éstos agotar previamente la vía administrativa.

Art. 49. La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el Derecho civil se sujetará a los requisitos y plazos establecidos en este ordenamiento, pero el procedimiento para hacerlas valer se someterá a lo previsto en los artículos anteriores para los actos administrativos anulables.

La resolución y sus efectos de contratos válidamente celebrados por la Administración, se regulará por las normas peculiares que para cada negocio contiene esta legislación.

CAPITULO IV

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Art. 50. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razones de interés público, los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos del Estado y este Reglamento (artículo 18 L. C. E.).

Art. 51. Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. En los casos de interpretación y resolución, cuando el precio del contrato sea superior a 100 millones de pesetas, y en los de modificación de estos últimos, cuando la cuantía de aquélla exceda del 20 por 100 del precio del contrato, será además preceptivo el dictamen del Consejo de Estado (artículo 18 L. C. E.).

La resolución del contrato requerirá autorización del Consejo de Ministros cuando este órgano hubiera otorgado la correspondiente para la celebración de aquél.

Art. 52. La ejecución de los contratos a que se refiere este Libro se desarrollará sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden al contratista bajo la dirección, inspección y res-

ponsabilidad del órgano de contratación correspondiente, el cual podrá despachar las instrucciones oportunas al empresario para el fiel cumplimiento de lo convenido e incluso en orden a la suspensión provisional o definitiva de la prestación.

Los pliegos de cláusulas contendrán las declaraciones precisas sobre el modo de llevar a cabo esta potestad administrativa.

Art. 53. Las resoluciones que dicte la Administración en el ejercicio de sus prerrogativas o como consecuencia de incidencias surgidas con posterioridad a la adjudicación son recurribles, con independencia de la validez y efectos del contrato a que se refieren.

CAPITULO V

JURISDICCION

Art. 54. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción (artículo 19 L. C. E.).

Las transacciones y arbitrajes se sujetarán a los requisitos establecidos en la Ley de Administración y Contabilidad.

TITULO II

Del contrato de obras

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 55. Se considerarán expresamente comprendidos en el presente Título los contratos de obras que tengan por objeto:

1. La construcción de un bien que tenga naturaleza de inmueble, tales como carreteras, ferrocarriles, puertos, presas, canales, edificios, fortificaciones, aeródromos, bases navales, monumentos, instalaciones varias y otros análogos.

2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, como dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, etc.

3. La reforma, reparación, conservación o demolición de los definidos en los párrafos anteriores.

En los contratos de obras, la Administración podrá aportar, total o parcialmente, los materiales, instalaciones u otros medios destinados a su ejecución.

CAPITULO II

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREPARATORIAS DEL CONTRATO DE OBRAS

Art. 56. A la adjudicación de un contrato de obras precederán las siguientes actuaciones administrativas:

1. Elaboración, aprobación y replanteo del proyecto.
2. Tramitación y resolución del expediente de contratación, con aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y del gasto correspondiente.

La Administración realizará las actuaciones preparatorias con la antelación precisa, a fin de que estén ultimadas en el curso del primer semestre de cada ejercicio, período durante el cual deberán normalmente adjudicarse los contratos, salvo que otra cosa se deduzca de los planes o programas correspondientes o concurren circunstancias justificadas que aconsejen demorar la tramitación del expediente.

A estos efectos, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación del contrato y su formalización correspondiente, aun cuando las obras deban iniciarse en el ejercicio siguiente (artículo 20 L. C. E.).

Para una mejor información de las Empresas interesadas, los órganos de contratación publicarán, al comienzo del ejercicio, la relación de los proyectos de obras, con indicación de características y presupuestos aproximados que se propone adjudicar durante el año.

Sección 1.ª De los anteproyectos y proyectos de obras

Art. 57. A los efectos de elaboración de los correspondientes proyectos, se clasifican las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.

b) Obras de reparaciones menores.

c) Obras de conservación y mantenimiento.

Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble.

El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.

Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente, tendrán la calificación de gran reparación, y en caso contrario, de reparación menor.

Si el menoscabo se produce en el tiempo, por el natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.

Art. 58. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra (artículo 21 L. C. E.).

Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de edificios aquellos bienes de equipo que deban ser empleados en el mismo mediante instalaciones fijas, siempre que constituyan complemento natural de la obra y su valor suponga un reducido porcentaje en relación con el presupuesto total del proyecto.

Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación deberán comprender todas las necesarias para lograr el fin propuesto.

Sin estos requisitos no podrán ser aprobados los proyectos ni el gasto que represente la ejecución de las obras que comprenda.

Art. 59. Cuando una obra admita fraccionamiento podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde la conveniencia del referido fraccionamiento (artículo 21 L. C. E.).

La autorización exigida en este último caso será competencia del Jefe del Departamento o autoridad en quien haya expresamente delegado esta facultad, y habrá de ser debidamente motivada.

Art. 60. Cuando en una obra concurren especiales circunstancias determinadas por su magnitud, complejidad o largo plazo de ejecución, podrá acordarse por los Jefes de los Departamentos la redacción de un anteproyecto de la misma con el alcance y contenido que se establezcan en el propio acuerdo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.

Art. 61. Los anteproyectos que hayan de servir de base a una posterior propuesta de gasto constarán de los documentos siguientes:

1.º Una Memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores sociales, técnicos, económicos y administrativos que se tienen en cuenta para plantear el problema a resolver y la justificación de la solución que se propone desde los puntos de vista técnico y económico, así como los datos y cálculos básicos correspondientes. También se justificarán los precios descompuestos adoptados.

Figurarán en dicha Memoria la manifestación expresa y justificada de que el anteproyecto comprende una obra completa en el sentido exigido por el artículo 58 de este Reglamento.

2.º Los planos de situación generales y de conjunto, necesarios para la definición de la obra en sus aspectos esenciales y para basar en los mismos las mediciones suficientes para la confección del presupuesto.

3.º Un presupuesto formado por un estado de mediciones de elementos compuestos, especificando claramente el contenido de cada uno de ellos; un cuadro de los precios adoptados para los diferentes elementos compuestos y el correspondiente resumen o presupuesto general que comprenda todos los gastos, incluso de expropiaciones a realizar por la Administración.

4.º Un estudio relativo a la descomposición del anteproyecto en proyectos parciales, con señalamiento de las fracciones del presupuesto que corresponderán a cada uno y de las etapas y plazos previstos para la elaboración, contratación y ejecución de los mismos.

5.º Cuando la obra haya de ser objeto de explotación retribuida será necesario acompañar asimismo los estudios relativos al régimen de utilización y posibles futuras tarifas.

La contratación de obras definidas por un anteproyecto sólo podrá tener lugar en las condiciones contempladas en el apartado 2 del artículo 113, y, excepcionalmente, por el sistema de administración.

Art. 62. Los anteproyectos deberán ser aprobados por la Autoridad a que corresponda la aprobación de los proyectos, según las normas particulares de cada Departamento ministerial.

Al aprobarse un anteproyecto quedará autorizada la redacción posterior de los proyectos parciales que en el mismo se indiquen y que podrán ser objeto de contratación y ejecución independientes.

Cuando el anteproyecto sirva de base para una propuesta de gasto, éste habrá de ser aprobado en su totalidad y por un solo acuerdo.

Los anteproyectos básicos podrán ser objeto de reforma con los mismos requisitos que sean necesarios para los proyectos de obras, de acuerdo con la legislación vigente. La aprobación de un proyecto parcial o de sus reformados, de los incluidos en un anteproyecto, representará, implícitamente, la aprobación de la reforma de éste.

Art. 63. Todo proyecto que se refiera a obras de primer establecimiento, de reforma o de gran reparación, comprenderá como mínimo:

A) Cualquiera que sea su cuantía:

1. Una Memoria que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.
2. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida.
3. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución.
4. Un presupuesto integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubriciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración.

B) Además, cuando la cuantía sea superior a cinco millones de pesetas:

1. Un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo, así como la clasificación que con arreglo al Registro deba ostentar el empresario para ajustarla.
2. Los documentos que sean necesarios para promover las autorizaciones o concesiones administrativas que sean previas a la ejecución.
3. Cuando las obras hayan de ser objeto de explotación retribuida se acompañarán los estudios económicos y administrativos sobre régimen de utilización y tarifas que hayan de aplicarse.

En los casos en que el empresario hubiera de presentar el proyecto de la obra, la Administración podrá limitarse a redactar las bases técnicas a que la misma haya de sujetarse (artículo 22 L. C. E.).

Art. 64. Serán factores a considerar en la Memoria los económicos, sociales, administrativos y estéticos, así como las justificaciones de la solución adoptada en sus aspectos técnico y económico y de las características de todas y cada una de las obras proyectadas. Se indicarán en ella los datos previos, métodos de cálculo y ensayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo se incluirán en anejos separados. También figurarán en otros anejos: El estudio de los materiales a emplear y los ensayos realizados con los mismos, la justificación del cálculo de los precios adoptados, las bases fijadas para la valoración de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas y el presupuesto para conocimiento de la Administración obtenido por la suma de los gastos correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, incluso honorarios reglamentarios, cuando procedan, del presupuesto de las obras y del importe previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicios y servidumbres afectados, en su caso.

Igualmente, en dicha Memoria figurará la manifestación expresa y justificada de que el proyecto comprende una obra completa o fraccionada, según el caso, en el sentido exigido por el artículo 58 o en el permitido por el 59, respectivamente. De estar comprendido en un anteproyecto aprobado, se hará constar esta circunstancia.

Art. 65. Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes.

Habrán de servir para la exacta realización de la obra a cuyos efectos deberá poderse deducir también de ellos los planos de ejecución en obra o en taller.

Art. 66. A los efectos de regular la ejecución de las obras, el pliego de prescripciones técnicas particulares deberá consignar, expresamente o por referencia a los pliegos de prescripciones técnicas generales que resulten de aplicación, las características que hayan de reunir los materiales a emplear, especificando, si se juzga oportuno, la procedencia de los materiales naturales, cuando ésta defina una característica de los mismos, y ensayos a que deben someterse para comprobación de las condiciones que han de cumplir; las normas para elaboración de las distintas unidades de obra, las instalaciones que hayan de exigirse y las precauciones a adoptar durante la construcción. En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas de carácter económico que deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas.

Igualmente detallará las formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas; establecerá el plazo de garantía y especificará las normas y pruebas previstas para las recepciones.

Art. 67. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución.

Se considerarán costes directos:

- a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
- c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
- d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos que luzcan en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará en cada caso, el técnico autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su posible plazo de ejecución.

En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistos y ulteriores a la aprobación técnica de los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos podrán los Jefes de los Departamentos, si la obra merece el calificativo de urgente, aplicar el porcentaje lineal de aumento señalado por la Oficina de Supervisión, al objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación.

Los Departamentos ministeriales dictarán las normas complementarias de aplicación al cálculo de los precios unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios.

Art. 68. Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas.

El presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá incrementando el de ejecución material en los gastos generales de estructuras que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes:

- a) Del 18 al 20 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la Empresa, gastos financieros, cargas fiscales, tasas de la Administración legalmente establecidas que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato.
- b) El 6 por 100, en concepto de beneficio industrial del contratista.

Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo del Gobierno cuando por variación de los supuestos actuales se considere necesario.

El presupuesto de ejecución de la obra directamente por la Administración, cuando se prevea la adopción de este sistema, será el obtenido como de ejecución material, incrementado en el porcentaje necesario para atender a las percepciones que puedan tener lugar por el trabajo o gestión de empresarios o laboradores a que se refiere el artículo 191.

Art. 69. El programa de trabajo especificará los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno de aquéllos.

La propuesta de clasificación que deba ser exigida a los contratistas que aspiren a la adjudicación del contrato será determinada con arreglo a las normas que sobre este particular hayan sido aprobadas a propuesta de la Comisión de Clasificación constituida en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Art. 70. En los proyectos de obras que tengan la consideración de reparaciones menores, podrán reducirse en extensión los documentos señalados en el artículo 63 e incluso suprimirse alguno de ellos, siempre que los restantes sean suficientes para definir, ejecutar y valorar las obras que comprende.

En todo caso, deberá figurar el presupuesto de las obras que será el único documento exigible cuando se trate de obras inferiores a 500.000 pesetas. Esta cifra podrá ser modificada por acuerdo del Consejo de Ministros.

Art. 71. Las obras de conservación serán objeto de proyectos o presupuestos análogos a los de reparaciones menores, excepto en los casos en que por sus características especiales no sean susceptibles de integrarse en un proyecto o en un presupuesto y hayan, por tanto, de ser ejecutadas directamente por la Administración con cargo a las consignaciones libradas periódicamente para estos fines.

Art. 72. La redacción y elaboración de proyectos deberá acomodarse a las previsiones generales establecidas en el presente Reglamento, y a las demás generales y especiales que se encuentren vigentes, en cuanto no se opongan a aquéllas.

En todos los casos, los distintos documentos que en su conjunto constituyan un proyecto deberán definir las obras en forma tal que otro facultativo distinto del autor de aquél pueda dirigir con arreglo al mismo los trabajos correspondientes.

Art. 73. Todos los Departamentos ministeriales que tengan a su cargo la realización de obras procederán a la redacción de instrucciones para la elaboración de proyectos, en las cuales se regularán debidamente las normas técnicas a que los mismos deban sujetarse.

Dichos Departamentos deberán establecer oficinas o secciones de supervisión de los proyectos encargadas de examinar detenidamente los elaborados por las oficinas de proyección y de vigilar el cumplimiento de las normas reguladoras de la materia (artículo 23 L. C. E.)

Art. 74. Las instrucciones para la elaboración de proyectos que hayan de dictarse en lo sucesivo, así como las modificaciones que se introduzcan en las mismas, deberán informarse previamente por el órgano técnico del Departamento correspondiente y por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en sus respectivas competencias. Después de su aprobación, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

También se publicarán en el dicho «Boletín Oficial del Estado», sin necesidad de remisión previa a aquella Junta, las instrucciones dictadas con carácter general con anterioridad a este Reglamento, y que no hubiesen sido publicadas.

El Gobierno podrá acordar que la instrucción de un determinado Ministerio sea aplicable a otro u otros que no tuviesen establecida su propia instrucción, previo informe del Departamento que se encuentre en dicho caso.

Las previsiones establecidas en este artículo se cumplirán de manera que la necesaria publicación en el «Boletín Oficial del Estado» quede efectuada, si no se hubiese realizado, en el plazo de doce meses, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, a no ser que el Gobierno acuerde otro mayor en casos especiales.

Art. 75. La competencia territorial de las oficinas técnicas de supervisión de proyectos será determinada por los distintos Departamentos ministeriales de acuerdo con las necesidades del servicio.

Cuando por el escaso volumen e importancia de las obras a realizar por un Ministerio no se juzgue necesario el establecimiento de dichas oficinas, el Gobierno podrá acordar que las funciones de supervisión sean ejercidas por la oficina del Departamento ministerial que por razón de la especialidad de su cometido resulte más idónea a la naturaleza de las obras, pudiendo recabarse informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre cuál sea la que mejor cumple a este último requisito.

Art. 76. Las oficinas de supervisión de proyectos tendrán como misión:

a) Examinar los anteproyectos y proyectos de obras de su competencia, así como las modificaciones de los mismos, incluso en su comprobación aritmética, recabando las aclaraciones, ampliaciones de datos o estudios, o rectificaciones que crean oportunas y exigiendo la subsanación o subsanando por sí mismas los defectos observados.

b) Vigilar el cumplimiento de las normas reguladoras de la materia haciendo cumplir especialmente las prevenciones contenidas en el presente Reglamento, las instrucciones técnicas que rijan para los distintos ramos y, en general, cuántas disposiciones legales sean aplicables al caso.

c) Ordenar, regular y coordinar los criterios técnicos.

d) Las demás funciones que les encomienden las disposiciones propias del Departamento.

Las oficinas de supervisión harán declaración expresa en sus informes de que el anteproyecto o proyecto cuya aprobación o modificación propone reúne cuantos requisitos son exigidos por este Reglamento, declaración que será recogida en la propia orden de aprobación.

El informe que deben emitir las oficinas de supervisión de proyectos deberá ser despachado en el plazo máximo de un mes, salvo casos excepcionales, contado a partir de la recepción del proyecto, y habrá de ser incorporado al expediente respectivo como documento integrante del mismo.

Art. 77. La Intervención General de la Administración del Estado, o en su caso las Intervenciones Delegadas de la misma, no procederán a la fiscalización previa de los gastos que tengan por base proyectos de obras cuando en la orden de aprobación de los mismos no figure el informe a que se refiere el artículo anterior.

Art. 78. Realizada la correspondiente información pública, en su caso, supervisado el proyecto y emitidos cuantos informes de otros órganos de la Administración sean preceptivos o se estime conveniente solicitar para un mayor conocimiento de cuantos factores puedan incidir en la ejecución o explotación de las obras, el Jefe del Departamento o la Autoridad en quien haya delegado o desconcentrado esta facultad, resolverá sobre la aprobación del proyecto.

Art. 79. Con carácter especial y exclusivamente respecto de aquellas unidades de obra cuyo número exacto sea de imposible determinación en el correspondiente proyecto, podrá acordarse que, además del gasto que sea estrictamente necesario según el presupuesto, se establezca una provisión destinada a sufragar el mayor importe que puedan suponer tales unidades de obras.

En estos casos deberá consignarse la oportuna cláusula contractual en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares por la cual quede obligado el contratista a la realización de este mayor número de unidades de obra de resultar necesario, bajo idénticas bases, por todos los conceptos, que las estipuladas para las inicialmente contratadas.

Art. 80. La fijación y utilización de dicha provisión se acomodará a las siguientes prevenciones:

1.ª Su importe no podrá exceder, salvo autorización expresa del Gobierno, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, del 15 por 100 del de las obras.

2.ª La provisión no será incorporada al presupuesto de contrata, si bien tendrá que ser tramitada, fiscalizada y aprobada al mismo tiempo que el gasto estricto que el proyecto presente. En todo caso será precisa, para su incorporación al proyecto, la justificación técnica de su necesidad.

3.ª Para llevar a cabo, cuando proceda, la utilización de la provisión será preciso tramitar el oportuno expediente, que deberá ser iniciado de oficio a instancia de la dirección facultativa de las obras, fundada en los supuestos determinantes de la utilización de dicha provisión e informada por la correspondiente oficina de supervisión.

Será requisito básico para la aprobación de dicho expediente que el gasto concreto que implique la utilización no rebase el importe del crédito contraído para realizar la provisión.

La aprobación de dicho expediente compete a la misma autoridad que aprobó el expediente original.

4.ª Cuando la ejecución de las obras ponga en evidencia que la provisión es innecesaria, podrá acordarse la descontracción total o parcial del crédito afectado a dicha posible atención del proyecto de que se trate, pero en tal supuesto no podrá ser nuevamente contraído en favor de dicha obra para la expresada finalidad.

5.ª La utilización de la provisión supondrá un aumento en el plazo establecido del mismo tanto por ciento que el que represente su importe sobre el total del contrato.

Sección 2.ª Del replanteo y de los pliegos de cláusulas administrativas particulares

Art. 81. Una vez aprobado el proyecto se procederá a efectuar el replanteo de la obra (artículo 24 L. C. E.).

Este se efectuará por el Servicio correspondiente y tiene por objeto comprobar la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos precisa para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuren en el proyecto aprobado y sean básicos para el contrato a celebrar.

A tales efectos se unirá certificación acreditativa bajo la personal responsabilidad del Jefe del Servicio correspondiente, de la plena posesión y de la disposición real de los terrenos necesarios para la normal ejecución del contrato, así como la viabilidad del proyecto. Sin la unión de esta certificación no podrá, en manera alguna, continuar la tramitación del expediente.

Art. 82. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares serán redactados por el Servicio competente y deberán contener los siguientes extremos:

1. Definición del objeto del contrato, con referencia al proyecto de que se trate, y mención expresa de los documentos del mismo que revistan carácter contractual. Obligatoriamente tendrán este carácter los planos, el pliego de prescripciones técnicas y los cuadros de precios.

2. Presupuesto formulado por la Administración, con la excepción prevista en los apartados 1) y 2) del artículo 113 y su distribución en anualidades, en su caso.

3. Constancia expresa de la existencia de los créditos precisos para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la Administración por el cumplimiento del contrato o mención de su especial circunstancia si se trata del caso previsto en el artículo 88.

4. Plazo total de ejecución del contrato e indicación de los plazos parciales correspondientes si la Administración estima oportuno establecer estos últimos o referencia de si se fijarán en la aprobación del programa de trabajo, señalando, en su caso, cuáles darán motivo a las recepciones parciales provisionales a que se refiere el artículo 170.

5. Derechos y obligaciones específicas de las partes del contrato con especial referencia al régimen de pagos.

6. Causas especiales de resolución del contrato.

7. Especial mención de las penalidades administrativas que sean de aplicación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de este Reglamento, así como de las que excepcionalmente puedan establecerse.

8. Plazo de garantía que ha de mediar entre la recepción provisional y definitiva de las obras objeto del contrato.

9. Cláusula de revisión del precio estipulado, en su caso, y cualesquiera otras que la Administración estime oportuno incluir, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de este Reglamento.

10. Indicación, en su caso, de aquellas cláusulas administrativas o prescripciones técnicas de los pliegos que puedan ser modificadas por las ofertas de los licitadores y límites de dichas modificaciones.

11. Forma de adjudicación del contrato, expresando las bases por las que ha de regirse la licitación, cuando ésta sea procedente, clasificación que haya de ostentar el empresario y garantías provisionales y definitivas a prestar por los contratistas.

12. Expresa sumisión a la legislación de contratos del Estado y al pliego de cláusulas administrativas generales aplicables, con especial referencia, en su caso, a las derogaciones de que haya sido objeto dicho pliego, con arreglo al artículo 38 de este Reglamento.

13. Los restantes datos y circunstancias que se exijan para cada caso por otros preceptos de este Reglamento.

Los Departamentos ministeriales podrán establecer modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación a los contratos de naturaleza análoga, que deberán ser informados previamente por la Asesoría Jurídica. En estos supuestos, el informe previsto en el artículo 83 se entenderá cumplido con el emitido respecto a este modelo tipo.

En todo caso, el informe de la Asesoría Jurídica será evacuado en el plazo máximo de diez días.

Sección 3.ª De los expedientes de contratación

Art. 83. Realizado el replanteo de la obra, se iniciará el expediente por acuerdo del órgano de contratación, debiendo incorporarse al mismo, en todo caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares que haya de regir en el contrato, el certificado de existencia del crédito y los informes de la Ase-

soría Jurídica y de la Intervención del Estado (artículo 24 L. C. E.).

También se unirá el acta de replanteo y la certificación prevenida en el artículo 81.

Art. 84. Los expedientes de contratación se tramitarán por el órgano de contratación con economía, celeridad y eficacia, y deberán contener, como mínimo, los documentos que a continuación se expresan:

a) Resolución aprobatoria del proyecto e informe de la Oficina de Supervisión.

b) Certificación sobre la viabilidad del proyecto y disponibilidad de los terrenos necesarios para el normal desarrollo del contrato con base en el resultado del replanteo previo de la obra, así como el acta donde éste conste.

c) Pliego de cláusulas administrativas particulares informado por la Asesoría Jurídica en la forma que expresan los artículos 81 y 82 del presente Reglamento.

d) Certificado de existencia de crédito presupuestario expedido por la Oficina de Contabilidad competente.

En las obras cuya financiación haya de realizarse con aportaciones de distintas procedencias, además de las presupuestarias deberá acreditarse en el expediente la plena disponibilidad de todas aquellas mediante los documentos vinculantes que según los casos resulten oportunos. Deberá figurar igualmente el orden de abono de las distintas aportaciones, de tal forma que el crédito presupuestario del Estado no sea el primero en utilizarse, salvo casos muy justificados.

Los mayores gastos de la obra sobre el presupuesto de adjudicación se abonarán en proporción a las respectivas aportaciones, salvo que otra cosa se haya establecido.

El órgano de contratación velará cerca de los otros entes cofinanciadores para que el adjudicatario perciba íntegramente el precio del contrato, así como sus adicionales y revisiones.

e) Intervención crítica del gasto, de acuerdo con los artículos 87 y 88 y demás disposiciones que sean aplicables, o emitida por el órgano competente de la Intervención General del Estado.

Art. 85. El expediente de contratación terminará mediante resolución motivada del órgano de contratación competente, aprobando el pliego de cláusulas administrativas particulares y la apertura del procedimiento de adjudicación.

Salvo que las normas de desconcentración establezcan otra cosa, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 21 de este Reglamento, la resolución aprobatoria del expediente de contratación comprenderá también la aprobación del gasto (artículo 24 L. C. E.).

Si no constaren en el expediente todos los documentos reseñados en el artículo 84, y señaladamente la certificación prevenida en el artículo 81, no se podrá, en manera alguna, so pena de incurrir en responsabilidad, acordar ni autorizar la apertura del procedimiento de adjudicación ni la contratación en su caso.

Art. 86. Los expedientes de contratación podrán ser de tres clases:

1. De tramitación ordinaria.
2. De tramitación urgente para las obras que revistan este carácter.
3. De régimen excepcional para las obras de emergencia (artículo 25 L. C. E.).

Art. 87. La fiscalización del gasto a que están sujetos los expedientes de contratación de tramitación ordinaria deberá ser evacuada por la Intervención del Estado dentro de los quince días siguientes a la fecha de entrada en la oficina correspondiente.

Art. 88. En los supuestos de contratos autorizados por los apartados 1, 2 y 3 del artículo 113 de este Reglamento hasta que se conozca el importe y condiciones del contrato, según la oferta seleccionada, no se procederá a la contratación del crédito preciso, a la fiscalización del gasto correspondiente y a su aprobación, circunstancias que serán recogidas en el correspondiente pliego de cláusulas.

Art. 89. Cuando los expedientes de contratación se ultimen, incluso con la adjudicación del contrato y su formalización correspondiente, y las obras deban iniciarse en el ejercicio siguiente, será preciso que se haya hecho constar en el expediente la retención de crédito suficiente para ello.

Si se establecieran otros condicionamientos deberán indicarse expresamente en el pliego de cláusulas.

Art. 90. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes que se refieran a obras de reconocida necesidad o cuya

adjudicación convenga acelerar por razones de interés público. A tales efectos, el expediente de contratación deberá contener la declaración de urgencia, debidamente razonada, acordada por Orden ministerial.

Los expedientes calificados de urgentes gozarán para su despacho de las siguientes excepciones:

1. Preferencia para su despacho por los distintos Organos administrativos, fiscalizadores y asesores que participen en la tramitación previa, que dispondrán de un plazo máximo y preclusivo de cinco días para emitir los respectivos informes, sin perjuicio de la posible anulación del acto cuando se hubiera producido por infracción del ordenamiento jurídico.

Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada lo haga indispensable, los órganos administrativos fiscalizadores y censores lo pondrán en conocimiento de la Autoridad que hubiere declarado la urgencia. En tal caso, el plazo quedará prorrogado por la nueva comunicación a diez días.

2. Acordada la celebración del contrato, se reducirán a la mitad los términos previstos en esta legislación para la licitación y adjudicación de las obras, cualquiera que sea la forma de contratación que proceda.

3. El replanteo y comienzo de las obras podrá realizarse a partir de la aprobación del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente documento público.

Podrán acogerse a la tramitación de urgencia, sin previa declaración al efecto, los contratos de cuantía inferior a cinco millones de pesetas (artículos 26 L. C. E.).

Art. 91. Cuando la Administración tenga que acometer obras de emergencia, a causa de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la Defensa Nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

1. El órgano de contratación competente, sin necesidad de tramitar expediente previo, podrá ordenar la directa ejecución de las obras indispensables o contratarlas libremente en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente legislación. Del acuerdo correspondiente se dará cuenta inmediata al Consejo de Ministros.

2. Simultáneamente, por el Ministerio de Hacienda, en expediente sumarisimo, se autorizará el libramiento de los fondos precisos a favor del órgano de contratación para hacer frente a los gastos, con el carácter de a justificar.

3. Desaparecida la causa determinante a que se refiere el párrafo primero de este artículo, el órgano de contratación dará cuenta al Ministerio de Hacienda de los gastos y contratos verificados a efectos de su fiscalización y ulterior aprobación, en su caso, por el Gobierno.

El resto de las obras que puedan ser necesarias se contratará de conformidad con lo establecido en esta legislación (artículo 27 L. C. E.).

CAPITULO III

FORMAS DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS.

Art. 92. Las formas de adjudicación de los contratos de obras serán las siguientes:

- 1.ª Subasta.
- 2.ª Concurso-subasta.
- 3.ª Concurso.
- 4.ª Contratación directa (artículo 28 L. C. E.).

Art. 93. La subasta versará sobre un tipo expresado en dinero, con adjudicación al oferente que, sin exceder de aquél, haga la proposición económicamente más ventajosa.

El concurso-subasta constará de dos actuaciones: En la primera se realizará la previa admisión de las Empresas que reúnan las condiciones especialmente requeridas por el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder concurrir a la licitación, y en la segunda se hará la adjudicación a la que, entre las admitidas, haga la proposición económicamente más ventajosa, sin exceder del tipo de la licitación.

En el concurso, la adjudicación recaerá en el oferente que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma y sin perjuicio del derecho de la Administración a declararlo desierto.

En la contratación directa, el contrato será adjudicado al empresario libre y justificadamente elegido por la Administración.

Art. 94. Los órganos de contratación podrán optar entre la subasta y el concurso-subasta, como formas de adjudicación,

cuando se trate de proyectos de obras muy definidos y de ejecución sencilla, cuya cuantía sea inferior a veinticinco millones de pesetas. Si los proyectos de obras no reúnen los expresados requisitos o su presupuesto fuere de cuantía superior a la indicada procederá, con carácter general, el concurso-subasta.

El concurso y la contratación directa serán de aplicación en los casos determinados por la presente legislación (artículo 28 L. C. E.).

Sección 1.ª De las subastas

Art. 95. Las subastas se anunciarán en el «Boletín Oficial del Estado» con una antelación mínima de veinte días hábiles a aquel en que haya de terminar el plazo para la presentación de las proposiciones. Si la subasta tuviese carácter internacional la antelación será, al menos, de cuarenta días hábiles (artículo 29 L. C. E.).

Cualquier aclaración o rectificación del anuncio de subasta se hará pública en igual forma que éste, debiendo computarse, en todo caso, a partir del nuevo anuncio el plazo establecido para la presentación de proposiciones. Únicamente será de cuenta del adjudicatario de las obras la publicación, por una sola vez, del expresado anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que otra cosa indique el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Art. 96. El anuncio de la licitación deberá tener, expresado resumidamente, el siguiente contenido por el orden que se indica:

- a) Objeto y tipo de la misma.
- b) Plazo de ejecución de la obra y fecha prevista para su iniciación.
- c) Oficinas o dependencias de la Administración donde estén de manifiesto el proyecto, el pliego de cláusulas administrativas particulares y demás elementos que convenga conocer para la mejor inteligencia del contrato.
- d) Garantía provisional que se exija a los licitadores.
- e) Clasificación que, en su caso, hayan de acreditar los empresarios para tomar parte en la subasta.
- f) Referencia al modelo de proposición.
- g) Plazo y lugares para la presentación de las proposiciones y día, hora y lugar en que haya de celebrarse la licitación, teniendo en cuenta la conveniencia de dejar un plazo entre ambos, para la subsanación de posibles defectos en la documentación presentada.
- h) Documentos que deben presentar los licitadores.

Art. 97. Las proposiciones se sujetarán al modelo que se establezca en el anuncio de la licitación, y su presentación, bajo sobre cerrado, en la oficina que en el mismo se indique, presume la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. Deberán ir acompañadas obligatoriamente, en sobre aparte, de los siguientes documentos:

1. Los que acrediten la personalidad del empresario.
2. El resguardo acreditativo de la fianza provisional.
3. Los que acrediten la clasificación del contratista, en su caso.
4. El carnet de Empresa con responsabilidad en los casos en que preceptivamente esté establecido para la actividad correspondiente.

Cuando sea necesaria la presentación de otros documentos deberán mencionarse expresamente en el anuncio, y el adjudicatario podrá presentarlos en cualquier momento anterior a la formalización del contrato, salvo que en dicho anuncio se disponga lo contrario (artículo 29 L. C. E.).

Si el adjudicatario no presentase los documentos expresados en el párrafo anterior se acordará la anulación de la adjudicación y la pérdida de la fianza provisional. El órgano de contratación procederá seguidamente a la adjudicación del contrato al licitador que sea el mejor postor, en su caso.

Art. 98. Los que acudan a la licitación en representación de otros lo acreditarán en la forma establecida en el artículo 25 del presente Reglamento.

Para los contratistas clasificados se estará, en cuanto a la exigencia de documentos, a lo señalado en el artículo 312.

Art. 99. Los sobres que han de presentarse estarán cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente; uno de ellos contendrá exclusivamente la proposición económica, ajustada al modelo inserto en el anuncio de la subasta, y el otro la documentación a que se refieren los artículos an-

teriores, haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y en ambos, el nombre del licitador.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el número de dependencias donde éstas puedan ser presentadas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las por él presentadas.

Art. 100. Las proposiciones u ofertas contractuales habrán de ser entregadas a mano en las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio dentro del plazo de admisión señalado en el mismo. No se admitirán las enviadas por correo o cualquier otro procedimiento diferente del señalado, salvo que el anuncio de la licitación lo autorice, respetándose siempre el secreto de la oferta.

Las oficinas receptoras darán recibo de cada proposición en el que conste el nombre del licitador, la denominación de la obra objeto de la licitación y el día y hora de la presentación. Una vez entregada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.

Terminado el plazo de recepción, los Jefes de las oficinas receptoras expedirán certificación relacionada de las proposiciones recibidas o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente con aquéllas remitirán al Secretario de la Mesa de contratación.

Art. 101. La Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma y procederá en acto público a la apertura de las proposiciones admitidas (artículo 31 L. C. E.).

A los efectos de la expresada calificación, el Presidente ordenará la apertura de los sobres, con exclusión del relativo a la proposición económica, y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentación presentada podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error.

En el lugar, día y hora señalados en el anuncio de la licitación tendrá lugar el acto de apertura de las proposiciones económicas, constituyéndose a estos efectos la Mesa de contratación.

Art. 102. Las Mesas de contratación estarán integradas del siguiente modo:

1. Un Presidente, designado por el Ministro.
2. Hasta dos Vocales nombrados por el Jefe del Servicio a que el contrato se refiera.
3. Un Asesor jurídico, en los Ministerios militares, un funcionario del Cuerpo de Letrados en el Ministerio de Justicia y un Abogado del Estado en los demás Departamentos.
4. Un Delegado de la Intervención General del Estado.
5. Un Secretario designado entre los funcionarios administrativos del Departamento (artículo 33 L. C. E.).

El Secretario será designado por el Presidente de la Mesa de contratación. En los Departamentos militares, la designación recaerá en un Jefe u Oficial de cualquier Cuerpo o Arma perteneciente a aquéllos, salvo que normas orgánicas atribuyan este cargo a funcionarios determinados.

Art. 103. Comenzará el acto de apertura de proposiciones económicas dándose lectura al anuncio de la subasta y procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuren en los certificados extendidos por los Jefes de las oficinas receptoras de las mismas, hecho lo cual se dará conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.

A continuación el Presidente notificará el resultado de la calificación de los documentos presentados a que se refiere el artículo 101, con expresión de las proposiciones rechazadas y causa de su inadmisión y de las proposiciones admitidas.

En caso de discrepancia entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar nuevamente una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

Art. 104. Antes de la apertura de la primera proposición económica se invitará a los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen

necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos a que se refiere el artículo 101.

Terminado este período no se admitirán observaciones que interrumpan el acto.

Art. 105. Si alguna proposición económica careciera de concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de subasta, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe del remate, será desechada por la Mesa. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal de que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para no admitir la proposición.

Tampoco será causa de desestimación la falta o insuficiencia de reintegro en los documentos sujetos a este impuesto, defecto que de no ser subsanado por el interesado lo será de oficio con cargo a la fianza provisional del licitador.

Si se presentaran dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las más ventajosas, se decidirá la adjudicación entre éstas mediante sorteo.

Art. 106. Cuando las circunstancias lo exijan a juicio del Ministro del Departamento correspondiente podrá consignarse el presupuesto del proyecto en un sobre cerrado y sellado por la Autoridad que acuerde la subasta, cuyo sobre se entregará al Presidente de la Mesa de contratación para que, después de leídas las proposiciones presentadas, se proceda a su apertura y a la adjudicación provisional de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente (artículo 30 L. C. E.).

Art. 107. La Mesa de contratación acordará la adjudicación provisional del contrato al mejor postor.

La adjudicación provisional no crea derecho alguno en favor del adjudicatario, que no los adquirirá frente a la Administración mientras esta adjudicación no tenga carácter definitivo por haber sido aprobada por la Autoridad competente (artículo 31 L. C. E.).

No podrá acordarse la adjudicación provisional sin que la Mesa se cerciore, y lo haga constar así expresamente en el acta, de que en el expediente constan todos los documentos a que se refiere el artículo 84.

Art. 108. Efectuada la adjudicación provisional se invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, y finalmente se levantará acta que recoja sucinta, pero fielmente, todo lo sucedido. El acta será firmada, al menos, por el Presidente y Secretario de la Mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presente sus reclamaciones o reservas.

Todas las proposiciones económicas presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente correspondiente. La documentación que acompaña a las proposiciones económicas quedará a disposición de los interesados, que podrán recogerla por sí o por un representante suyo en la misma oficina donde fueron entregadas. Se exceptúa de esta devolución el documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional por parte del adjudicatario, que quedará retenido a los efectos señalados en el artículo 120 de este Reglamento. Cuando en opinión de la Mesa de contratación se dé el supuesto a que se refiere el apartado b) del artículo 109, podrá acordar que la garantía provisional del mejor postor, no incurra en temeridad, quede también retenida a resultas de la decisión que se adopte.

Asimismo en el caso de que se formulen protestas y reclamaciones sobre los documentos o proposiciones presentadas, se retendrán las que sean objeto de aquéllas, así como las proposiciones y el resguardo de la fianza. Todo ello con objeto de que, formulada por escrito la reclamación ante el órgano contratante, tenga éste los elementos y datos suficientes para resolver el procedimiento.

Art. 109. La aprobación o adjudicación definitiva por la Autoridad competente perfeccionará el contrato de obras diferido mediante subasta. Dicha aprobación deberá recaer dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de la adjudicación provisional. En caso contrario, el licitador interesado podrá retirar su proposición y la fianza que hubiese prestado.

La adjudicación definitiva confirmará la provisional, excepto en los siguientes casos:

- a) Cuando la Mesa de contratación haya verificado la adjudicación provisional con infracción del ordenamiento jurídico. En tal caso será preceptivo el dictamen previo de la Asesoría Jurídica del Departamento.

b) Cuando la Autoridad que haya de otorgar la aprobación presuma fundadamente, previo informe preceptivo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que la proposición no puede ser normalmente cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias.

Cuando no se confirme la adjudicación provisional en el caso del apartado a), la subasta será declarada desierta. En el supuesto del apartado b), se adjudicará el contrato al licitador que, no estando incurso en presunción de temeridad, sea el mejor postor, salvo que el órgano de contratación considere más conveniente anunciar nueva licitación (artículo 32 L. C. E.).

Señaladamente, se denegará la adjudicación definitiva, por infracción del ordenamiento jurídico, cuando resulte incumplido en el expediente lo prevenido en el artículo 85 sobre el acta de replanteo y sobre la certificación relativa a la posesión y disponibilidad de los terrenos y a la viabilidad de la ejecución de las obras.

Se considerará, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda en diez unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de apreciar, no obstante, previos los informes adecuados, y la audiencia del adjudicatario, como susceptible de normal cumplimiento las respectivas proposiciones.

Sección 2.ª De los concursos-subastas

Art. 110. Para la adjudicación de contratos por el procedimiento de concurso-subasta, las Empresas interesadas deberán ser previamente admitidas a la subasta por el órgano de contratación correspondiente.

A este efecto, dicho órgano establecerá, en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, los criterios objetivos que hayan de regular la admisión previa. Los documentos justificativos que se exijan para dicha admisión se acompañarán en sobre independiente a la proposición y documentación a que se refiere el artículo 99 de este Reglamento.

A la vista de los referidos documentos justificativos, el órgano de contratación resolverá sobre la admisión previa de los empresarios a la subasta.

Los criterios objetivos precisarán suficientemente los requisitos que hayan de reunir los empresarios para su admisión previa, justificando en el expediente la procedencia de los mismos, y atenderán, entre otros, a factores tales como la experiencia en modernas tecnologías vinculadas al tipo de obra; la correcta programación de las obras en cuestión según diagramas de tiempos, actividades y previsiones de costes; el plan de dispositivos e instalaciones disponibles en orden a la adecuada organización y ejecución del proceso constructivo, o a otros factores análogos que permitan criterios seguros de selección.

Art. 111. Los concursos-subastas se anunciarán en el «Boletín Oficial del Estado» con una antelación mínima de veinte días hábiles a aquel en que haya de terminar el plazo para la presentación de la documentación exigida. Si tuvieran carácter internacional la antelación será al menos de cuarenta días hábiles.

La admisión previa de los empresarios deberá ser resuelta mediante resolución motivada en un plazo no superior a los seis días, contados a partir del día siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones. Esta admisión previa no prejuzga el resultado de la admisión definitiva, que sólo tendrá lugar por la Mesa de contratación una vez examinados por ella los documentos a que se refieren los artículos 97 y 98.

Art. 112. El Presidente de la Mesa de contratación, en el acto público de adjudicación provisional, notificará el resultado de la admisión a las Empresas intervinientes, y seguidamente la Mesa acordará la adjudicación provisional al mejor postor de los admitidos, de acuerdo con las normas de aplicación al procedimiento de subastas (artículo 34 L. C. E.).

Serán de aplicación al concurso-subasta los preceptos relativos a la subasta excepto en lo que sea exclusivamente aplicable a esta forma de adjudicación.

Sección 3.ª De los concursos

Art. 113. Se celebrarán mediante concurso los contratos siguientes:

1. Aquellos en que no sea posible la fijación previa de un presupuesto definitivo.

2. Los que se refieran a la ejecución de obras cuyos proyectos o prescripciones técnicas no hayan podido ser establecidos previamente por la Administración y cuyos anteproyectos deban presentar los licitadores.

3. Cuando el órgano de contratación considere que el proyecto aprobado por la Administración es susceptible de ser mejorado por otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores.

4. Aquellos para la realización de los cuales facilite la Administración materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas.

5. Los relativos a obras de tecnología especialmente avanzada o cuya ejecución sea particularmente compleja, siempre que la anualidad media sea superior, en ambos casos, a 100 millones de pesetas.

Si el órgano de contratación considera conveniente, en los supuestos anteriores, la admisión previa de los licitadores al concurso, se denominará este procedimiento concurso restringido y será de aplicación a aquella lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 110 de este Reglamento (artículo 35 L. C. E.).

Se entenderá por anualidad media el resultado de multiplicar por 12 el cociente entre el presupuesto de la obra y el plazo de ejecución calculado en meses.

Art. 114. Los preceptos relativos a la celebración de la subasta regirán también para el concurso excepto en lo que sea exclusivamente aplicable a aquella forma de adjudicación (artículo 36 L. C. E.).

En especial no es de aplicación a los concursos los preceptos que para las subastas se establecen en el tercer párrafo del artículo 105 y en los artículos 107 y 109, entendiéndose con carácter general que los restantes quedan modificados por lo que específicamente se señala en los artículos que siguen.

Art. 115. En los pliegos de cláusulas de los concursos se precisarán los criterios básicos a tener en cuenta para realizar la adjudicación del contrato.

Los licitadores en el concurso podrán introducir en sus proposiciones las modificaciones que puedan hacerlas más convenientes para la realización del objeto del contrato, dentro de los límites que señale expresamente el pliego de cláusulas administrativas (artículo 38 L. C. E.).

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, pero ésta puede comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato. En el supuesto contemplado en el número 2 del artículo 113, los anteproyectos deberán reunir los requisitos que establecen los artículos 61 y siguientes del presente Reglamento, y se incorporarán a la proposición como parte integrante de la misma.

Art. 116. La Mesa de contratación, en el acto del concurso, procederá a la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores y las elevará, con el acta y las observaciones que estime pertinentes, a la Autoridad que haya de verificar la adjudicación del contrato.

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso (artículo 38 L. C. E.).

Cuando las proposiciones se refieran a la ejecución de obras cuyos proyectos no hayan sido previamente establecidos por la Administración o contengan modificaciones sobre el aprobado por ésta, será preceptivo el informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos del Departamento correspondiente previamente a la adjudicación del contrato.

Transcurridos tres meses desde la fecha de apertura de las proposiciones sin que la Administración hubiese dictado acuerdo resolutorio del concurso, y salvo que en las bases del mismo se hubiera establecido otro plazo mayor, podrán los licitadores que lo deseen retirar sus ofertas, así como las fianzas depositadas como garantía de las mismas.

Sección 4.ª De la contratación directa

Art. 117. La contratación directa sólo podrá acordarse por el órgano de contratación respecto de las siguientes clases de obras:

1. Aquellas en que no sea posible promover concurrencia en la oferta o en que por circunstancias excepcionales, que habrán de justificarse en el expediente, no convenga promoverla.

2. Las de reconocida urgencia, surgida como consecuencia de necesidades apremiantes que demandaran una pronta ejecución, que no pueda lograrse por medio de la tramitación urgente regulada en el artículo 28 de la Ley y 90 de este Reglamento, previa justificación razonada en el expediente y acuerdo del Jefe del Departamento.

3. Las de presupuesto inferior a cinco millones de pesetas.
4. Las que sean declaradas de notorio carácter artístico con arreglo al dictamen de Organismos competentes.
5. Aquellas que, por afectar a la seguridad del Estado, precisen garantías especiales, o cuyo expediente haya sido declarado secreto y no puedan realizarse directamente por la Administración.
6. Las de instalación y montaje de los aparatos de faro y de todas las señales de navegación y, en general, la instalación de instrumentos de control que exijan una gran precisión y seguridad.
7. Las que no llegaran a adjudicarse por falta de licitadores o porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles, siempre que la adjudicación directa se acuerde en las mismas condiciones y precio no superior a los que hayan sido objeto de licitación.
8. Cuando el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre que la adjudicación directa se acuerde en las mismas condiciones y precio no superior a los que hayan sido objeto de licitación.
9. Los que tengan por finalidad continuar la ejecución de obras cuyos contratos hayan sido resueltos, con los mismos requisitos del apartado anterior, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del apartado 2 de este mismo artículo.
10. Las que tengan por objeto el ensayo o experimentación.
11. Las de interés militar que puedan ser ejecutadas directamente por Organismos autónomos de carácter industrial, suficientemente aptos para la realización de la obra proyectada (artículo 37 L. C. E.).

Art. 118. Excepto en los supuestos de los apartados 1 y 5 del artículo anterior, el órgano de contratación deberá consultar, antes de realizar la adjudicación, al menos a tres Empresas, si ello es posible, capacitadas para la ejecución de las obras, y fijar con la seleccionada el precio justo del contrato, dejando constancia de todo ello en el expediente (artículo 37 L. C. E.).

Cuando se trate de obras de alto interés militar, la consulta se realizará en la forma que estime conveniente el órgano de contratación.

Estas consultas pueden también realizarse, si lo estima conveniente el órgano de contratación, mediante anuncio público, o de la forma que establezca con carácter general el Departamento ministerial correspondiente.

La adjudicación no podrá tener lugar, en ningún caso, por importe superior al presupuesto previamente aprobado conforme al proyecto de la obra.

Sección 5.ª De la publicidad de las adjudicaciones

Art. 119. La adjudicación del contrato, cualquiera que sea el procedimiento seguido al efecto, deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sea aprobado por la Autoridad competente.

Quedan exceptuados de esta prevención los contratos cuyo importe sea inferior a cinco millones de pesetas y los de carácter reservado (artículo 38 L. C. E.).

La adjudicación será notificada en todos los casos directamente al adjudicatario. Para los restantes licitadores interesados en el procedimiento, hará las veces de notificación la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y cuando ésta no tenga lugar, la Administración pondrá en conocimiento de ellos la resolución adoptada.

La publicación de la adjudicación del contrato en el «Boletín Oficial del Estado», a que se refiere el presente artículo, tiene la consideración de anuncio oficial y su inserción será obligatoria y gratuita.

CAPITULO IV

FORMALIZACION DEL CONTRATO DE OBRAS

Art. 120. El contrato de obras, cualquiera que sea la forma de adjudicación, se formalizará en todo caso dentro de los treinta días siguientes a su aprobación.

Cuando por causas imputables al empresario no pudiese formalizarse el contrato, la Administración acordará la resolución del mismo, previa audiencia del interesado y con incautación de la fianza provisional (artículo 39 L. C. E.).

Si las causas fueran imputables a la Administración, ampliará ésta el plazo señalado en el mismo tiempo que resultare perdido como consecuencia de la causa de que se trate, indemnizando al contratista los daños que esta demora le pueda ocasionar.

Art. 121. El documento en que se formalice el contrato de obras será, según los casos, notarial o administrativo.

Deberán formalizarse en escritura pública los contratos siguientes:

- 1.º Los que hayan de anotarse o inscribirse en algún registro que exija el cumplimiento de este requisito.
- 2.º Aquellos cuyo precio sea superior a dos millones quinientas mil pesetas.
- 3.º Cuando la Administración o el contratista lo soliciten.

Los demás contratos se formalizarán en documento administrativo (artículo 40 L. C. E.).

Los Departamentos ministeriales podrán obtener, con los trámites que la legislación notarial establezca, la adscripción temporal de uno o más Notarios que queden encargados de autorizar los documentos en que aquéllos intervengan.

Art. 122. El documento notarial o administrativo, según los casos, deberá contener los siguientes requisitos:

1. Autoridad y empresarios intervinientes, con referencia a su competencia y capacidad jurídica, respectivamente.
2. Los antecedentes administrativos del contrato siguientes:
 - a) Fecha de aprobación técnica del proyecto de las obras, de la contracción del gasto y de su fiscalización previa.
 - b) Copia de la disposición administrativa que autorizó la celebración del contrato y de la Orden de su adjudicación definitiva.

3. Definición de la obra que haya de ejecutarse, con referencia al proyecto correspondiente, y mención expresa de los documentos del mismo que obligarán al contratista en la ejecución de aquella.

4. Precio cierto que ha de abonar la Administración con expresión del régimen de pagos previsto.

5. Plazo total de ejecución de la obra y, en su caso, los plazos parciales que se establezcan y el especial para la comprobación del replanteo y el de garantía.

6. Fianza prestada por el contratista y garantías a prestar por el mismo, en su caso, durante el desarrollo del contrato.

7. Las cláusulas que sean consecuencia de las modificaciones válidamente propuestas por el adjudicatario en su oferta y que hayan sido aceptadas por la Administración.

8. Indicación de si el pliego de cláusulas administrativas particulares contiene cláusula de revisión del precio estipulado y de penalidades administrativas de especial aplicación.

9. Conformidad del contratista al pliego de cláusulas administrativas particulares, del que se hará constar la oportuna referencia.

10. Sumisión expresa del contratista a los preceptos de este Reglamento y al pliego de cláusulas generales pertinente en lo que no esté expresamente derogado por el pliego que contenga las particulares.

Al documento público se unirá como anexo un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares, que será firmado por el adjudicatario y, según los casos, protocolizado o archivado.

Se autoriza al Ministro de Hacienda para establecer modelos oficiales a los que deben sujetarse los documentos administrativos para la formalización de los contratos de obras.

Art. 123. El documento administrativo será suscrito por la Autoridad competente y el contratista, previo examen por la Asesoría Jurídica y demás asesoramientos reglamentarios, salvo cuando se ajuste a un modelo-tipo informado favorablemente por ella para ser aplicado con carácter general.

El documento administrativo se incorporará al expediente, y cuando lo sea notarial se incorporará una copia autorizada del mismo.

Simultáneamente con la formalización del contrato, el adjudicatario firmará su conformidad en aquellos documentos del proyecto de las obras que revistan carácter contractual por mención expresa en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El ejemplar del proyecto así diligenciado será custodiado por la Administración.

Art. 124. Una vez otorgado el documento se remitirá por medio de los servicios de Intervención al Ministerio de Hacienda para su registro por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y posterior traslado, en su caso, al Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 18 de este Reglamento. La ejecución del contrato no quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos por el presente artículo (artículo 42, L. C. E.).

La remisión del documento a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa deberá tener lugar en el plazo de treinta días siguiente a su otorgamiento; a tal efecto, el Notario autorizante de la escritura pública deberá entregar las co-

pias del documento al órgano de contratación antes de la conclusión del expresado plazo.

Art. 125. La Administración no podrá contratar verbalmente la ejecución de obras, cualquiera que sea la cuantía de las mismas, ni podrá iniciarlas sin la previa formalización del contrato correspondiente, excepto en los casos a que se refieren los artículos 90 y 91 de este Reglamento (artículo 41 L. C. E.).

Las Autoridades y funcionarios que contraten con empresarios la puesta en marcha de obras sin cumplir los requisitos exigidos por el presente Reglamento serán personalmente responsables de los pagos derivados del negocio irregular.

CAPITULO V

EFFECTOS DEL CONTRATO DE OBRAS

Art. 126. Los efectos del contrato de obras se regularán por la Ley de Contratos del Estado y sus disposiciones reglamentarias, así como por el pliego de cláusulas administrativas generales en lo que no resulte éste válidamente derogado por las particulares del contrato (artículo 43 L. C. E.).

Sección 1.ª Ejecución del contrato de obras

Art. 127. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acto de comprobación del replanteo, que se sujetará a las reglas que a continuación se indican:

A. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes de la fecha de su formalización, salvo casos justificados, el servicio de la Administración encargado de las obras procederá en presencia del contratista a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

B. Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de la comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con las consecuencias o efectos prevenidos en la Ley y en este Reglamento.

C. Si por culpa o negligencia de la Administración se demorare la comprobación del replanteo, y requerida aquélla fehacientemente por el contratista, no se llevará a efecto dentro del mes siguiente al requerimiento, el contratista tendrá derecho, que deberá ejercitar precisamente dentro de los treinta días siguientes a la expiración de este plazo, a que la Administración le indemnice con un 2 por 100 del precio de la adjudicación, quedando con ello *ipso iure* resuelto el contrato sin otras consecuencias económicas, salvo la devolución de la fianza al contratista.

D. Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

E. En el caso contrario, o sea, cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el precedente párrafo o cuando el citado facultativo entienda necesario la modificación de las obras proyectadas o el contratista haga presente reservas, se hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras hasta que por la Autoridad u órgano que celebró el contrato se dicte la resolución que estime oportuna dentro de las facultades que le están conferidas por la legislación de contratos del Estado. En tanto sea dictada esta resolución, y salvo el caso en que resulten infundadas las reservas del contratista, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día siguiente a la firma del acta, a los fines de reconocimiento de los derechos que cuando se produce esta situación concede el primer párrafo del artículo 148 de este Reglamento a los contratistas.

F. Si la suspensión de la iniciación de las obras tuviera carácter definitivo por causa imputable a la Administración, o ésta desistiere de las mismas o, en fin, dejare transcurrir seis meses de la suspensión sin dictar y notificar al contratista la resolución que estime oportuna, éste tendrá derecho a la resolución del contrato y a percibir por todos los conceptos una única indemnización del 3 por 100 del precio de la adjudicación. De este derecho deberá hacer uso el contratista precisamente dentro del mes siguiente a la expiración del expresado plazo de seis meses.

G. Si resultaren infundadas las reservas, en su caso, del contratista, formuladas en el acto de comprobación del replanteo o, si fueren superadas las causas que impidieran la iniciación de las obras, se dictará acuerdo, autorizando el comienzo de éstas mediante acto formal, debidamente notificado al contratista. El cómputo del plazo de ejecución se contará desde el día siguiente al de la notificación.

Art. 128. El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras, cuando se establezca expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Esta cláusula deberá figurar siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad. La Administración resolverá sobre él dentro de los treinta días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

El programa de trabajos especificará, dentro de la ordenación general de los mismos, los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra compatibles con los plazos parciales establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares para la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra.

El Director de la obra podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Art. 129. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el programa de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Art. 130. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al proyecto que sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diere al contratista el facultativo de la Administración, que serán de obligado cumplimiento para aquél, siempre que lo sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista es responsable de las faltas que en la construcción puedan advertirse (artículo 44 L. C. E.).

Art. 131. Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Administración y el contratista serán tramitadas y resueltas por la primera a la mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras.

A estos efectos, el órgano de la Administración que haya celebrado el contrato facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al contratista para la construcción de la obra, y le prestará su apoyo en los demás casos.

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrá verificarse por motivo grave y mediante acuerdo del órgano que celebró el contrato correspondiente, a propuesta del facultativo competente de la Administración.

Art. 132. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de esta legislación se considerarán como tales únicamente las que siguen:

1. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
2. Los daños causados por los terremotos y maremotos.
3. Los que provengan de los movimientos del terreno en que estén construidas las obras o que directamente las afecten.
4. Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada, en tiempos de guerra, sediciones populares o robos tumultuosos.
5. Inundaciones catastróficas producidas como consecuencia del desbordamiento de ríos o arroyos, siempre que los daños no se hayan producido por la fragilidad de las defensas que hubiera debido construir el contratista en cumplimiento del contrato, y
6. Cualquier otro de efectos análogos a los anteriores, previo acuerdo del Consejo de Ministros (artículo 46 L. C. E.).

Art. 133. El contratista que estimare le es de aplicación alguna de las excepciones establecidas en el artículo anterior presentará la oportuna reclamación al facultativo Director de las obras en el plazo de veinte días, contados desde la fecha final del acontecimiento, manifestando los fundamentos en que se apoya, los medios que haya empleado para contrarrestar sus efectos y la naturaleza, entidad e importe de los daños sufridos.

El citado facultativo comprobará seguidamente sobre el terreno la realidad de los hechos, y previa toma de los datos necesarios y de las informaciones pertinentes, procederá a la valoración de los daños causados, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa alegada, de su relación con los perjuicios ocasionados y, en definitiva, sobre la procedencia o no de indemnización.

La resolución del expediente corresponderá al órgano o Entidad que haya celebrado el contrato, previa audiencia del contratista e informe de la Asesoría Jurídica.

Art. 134. Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. También será ésta responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de vicios de proyecto.

Las reclamaciones de los terceros se presentarán, en todo caso, en el término de un año, ante el órgano de contratación que decidirá en el acuerdo que dicte, oído el contratista, sobre la procedencia de aquéllas, su cuantía y la parte responsable. Contra su acuerdo podrá interponerse recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Art. 135. En los contratos en que la Administración facilite al contratista materiales precisos para la obra, se considerarán éstos en depósito desde el momento de la entrega, siendo el contratista responsable de su custodia y conservación hasta tanto que la obra sea recibida provisionalmente y sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda fijar en el pliego de cláusulas administrativas particulares las garantías que estime pertinentes.

Art. 136. Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos del Estado para casos específicamente tratados, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución de un contrato de obras por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes:

- 1.ª Propuesta del facultativo Director de las obras o petición del contratista.
- 2.ª Audiencia del contratista o informe del citado facultativo, a evacuar en ambos casos en un plazo de quince días.
- 3.ª Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General del Estado, a evacuar en el mismo plazo anterior.
- 4.ª Resolución del órgano o Autoridad que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación al contratista.

Salvo que motivo de interés público lo justifique, la tramitación de incidencias no determinará la paralización de las obras.

Sección 2.ª Del cumplimiento de los plazos

Art. 137. El contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y el general para su total realización.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de fianza o por la imposición de las penalidades que se establecen en el artículo siguiente. Esta misma facultad tendrá la Administración respecto de determinados plazos parciales cuando se hubiera previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

La constitución en mora del contratista no requerirá interposición o intimación previa por parte de la Administración (artículo 45 L. C. E.).

Cuando en el supuesto anterior de incumplimiento del plazo total por causas imputables al contratista le Adminis-

tración opte por la imposición de penalidades, concederá la ampliación del plazo que estime resulta necesaria para la terminación de las obras.

Art. 138. Sin perjuicio de que el Gobierno pueda autorizar otras penalidades distintas para un determinado contrato, éstas se graduarán con carácter general en atención al presupuesto total o parcial de la obra, según que el plazo incumplido sea el total o uno parcial de la misma, con arreglo a la siguiente escala:

Hasta 500.000 pesetas,	500 pesetas diarias.	
De 500.001 a 1.000.000 de pesetas,	1.000 pesetas diarias.	
De 1.000.001 a 5.000.000 de pesetas,	2.000 pesetas diarias.	
De 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas,	3.000 pesetas diarias.	
De 10.000.001 a 25.000.000 de pesetas,	5.000 pesetas diarias.	
De 25.000.001 a 100.000.000 de pesetas,	10.000 pesetas diarias.	
De 100.000.001 a 250.000.000 de pesetas,	25.000 pesetas diarias.	
De 250.000.001 a 500.000.000 de pesetas,	50.000 pesetas diarias.	
De 500.000.001 a 750.000.000 de pesetas,	75.000 pesetas diarias.	
De 750.000.001 a 1.000.000.000 de pesetas,	100.000 pesetas diarias.	
De 1.000.000.001 en adelante,	el 1 por 10.000 pesetas diarias.	

En ningún caso, las penalidades por demora podrán exceder del 20 por 100 del presupuesto total de la obra, por lo que una vez alcanzado este límite máximo se procederá a la resolución del contrato.

Las penalidades por incumplimiento de los plazos parciales no son acumulables entre sí, ni tampoco a las que pudieran corresponder por incumplimiento del plazo total, excepto las debidas a incumplimiento de plazos parciales que correspondan a las recepciones provisionales previstas en el artículo 170 de este Reglamento, que quedarán firmes y definitivas.

Consecuentemente, al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la penalidad a él correspondiente absorberá las que hayan tenido lugar anteriormente, con el carácter de no acumulables, hasta que sean liquidadas e incluso procediéndose a la devolución de la diferencia si el montante de las ya impuestas resultase superior al que corresponde por el último plazo incumplido.

Si se han producido recepciones parciales provisionales al amparo del citado artículo 170, el plazo final operará exclusivamente como último plazo parcial.

Art. 139. Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos en las certificaciones de obras que se produzcan. En todo caso, la fianza responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 358 de este Reglamento.

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

Art. 140. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había designado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiera otro menor (artículo 45 L. C. E.).

La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de un mes desde el día en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, y sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último de vigencia del contrato, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 138, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato.

Art. 141. En los supuestos de incumplimiento de plazo imputable al contratista, el Gobierno, con carácter excepcional, podrá acordar que el órgano de contratación asuma directamente la gestión de la obra en las condiciones que en el acuerdo se establezcan hasta alcanzar el ritmo previsto en el contrato, utilizando la maquinaria, elementos materiales de trabajo y demás medios análogos afectos a la obra, pudiendo incluso subrogarse en las operaciones y negocios celebrados

con terceros para la adquisición de maquinaria o de materiales.

Los mayores gastos que ocasiona la ejecución de la obra por la Administración serán satisfechos con cargo a la fianza definitiva establecida en el contrato y hasta el límite del importe de ésta.

Sección 3.ª Abonos al contratista

Art. 142. El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al precio convenido (artículo 47 L. C. E.).

A los efectos del pago la Administración expedirá mensualmente certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo que se establezca otra cosa en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenda.

Art. 143. La Administración podrá verificar también abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas por el contratista, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones señaladas en los pliegos de cláusulas, debiendo aquélla adoptar las medidas convenientes para que queden previamente garantizados los referidos pagos mediante la prestación de aval, conforme al artículo 370 de este Reglamento, por el importe de aquéllos.

Art. 144. Si la Administración no hiciese el pago al contratista de las certificaciones dentro de los tres meses siguientes a la fecha de aquéllas, deberá abonar al mismo, a partir de aquella fecha el interés legal de las cantidades debidas, siempre que aquél intime por escrito el cumplimiento de la obligación (artículo 47 L. C. E.).

En las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo anterior desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse.

La Administración resolverá sobre la procedencia del abono de interés dentro del plazo de dos meses, contado a partir del requerimiento formulado por el contratista, previo informe de la Asesoría Jurídica del Departamento, que también dictaminará sobre las causas que han originado la mora y las responsabilidades a que pudiera haber lugar.

El abono de intereses se hará efectivo en la liquidación provisional del contrato, con independencia de la correspondiente a la obra y sin perjuicio de proceder reglamentariamente a la devolución de la fianza prestada por el contratista.

Cuando la demora en el pago de las certificaciones supere el plazo de seis meses, el contratista podrá solicitar de la Administración la declaración de suspensión temporal de las obras, que será concedida salvo que razones de interés público aconsejen su continuación.

Art. 145. Las certificaciones sólo podrán ser embargadas con destino al pago de salarios devengados en la propia obra y al de las cuotas sociales derivadas de los mismos (artículo 47 L. C. E.).

Las certificaciones que se expedirán precisamente a nombre del contratista serán transmisibles y pignoras conforme a derecho. Una vez que la Administración tenga conocimiento de la transmisión de aquéllas el mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario, indicando también el nombre del cedente. Antes de que se ponga en conocimiento de los órganos competentes la cesión surtirán efectos liberatorios los mandamientos de pago extendidos a nombre del contratista.

Los Servicios de Contabilidad competentes consignarán, mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de razón en un libro registro de transmisiones de certificaciones habilitado al efecto.

Sección 4.ª Modificación del contrato de obras

Art. 146. Una vez perfeccionado el contrato la Administración sólo puede modificar los elementos que lo integran dentro de los límites que establece la presente Legislación (artículo 48 L. C. E.).

El ejercicio de esta prerrogativa llevará consigo la obligación, a cargo de la Administración, de indemnizar los daños y perjuicios originados al contratista en los términos establecidos en este Reglamento.

Art. 147. La modificación del contrato cuando sea causa de resolución deberá ser acordada por el órgano de contratación competente, previa autorización del Consejo de Ministros en los casos a que se refiere el artículo 21 de este Reglamento. Si la modificación no fuera causa de resolución, será acordada por el órgano de contratación.

En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 51 de este Reglamento (artículo 48 L. C. E.).

Art. 148. Si la Administración acordase la suspensión temporal de las obras por espacio superior a una quinta parte del plazo total del contrato, o, en todo caso, si aquélla excediera de seis meses, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios que éste pueda efectivamente sufrir.

La suspensión definitiva de las obras acordada por la Administración se regulará por lo dispuesto en el artículo 162 del presente Reglamento (artículo 49 L. C. E.).

Art. 149. La Administración sólo podrá acordar modificaciones en el proyecto de obras cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto, cuyas circunstancias deberán quedar debidamente justificadas.

Cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más o en menos en el presupuesto de las obras será reajustado su plazo de ejecución, sin que pueda ser aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte afectado el presupuesto.

Art. 150. Si durante la ejecución del contrato la Administración resolviese introducir en el proyecto modificaciones que produzcan aumento o reducción y aun supresión de las unidades de obra marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de obras a reclamar ninguna indemnización sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 157 de este Reglamento (artículo 50 L. C. E.).

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en la contrata o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta del Director de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia. Si ésta no aceptase los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades de obra y la Administración podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento administrativo.

Art. 151. Cuando por contener el proyecto unidades de obra de difícil determinación en cuanto a su número exacto se haya aprobado la provisión especial a que se refiere el artículo 79 de este Reglamento, su utilización no tendrá a ningún efecto el carácter de modificación del contrato, no obstante el aumento de su plazo, según lo dispuesto en el apartado 5) del artículo 80.

Tampoco tendrá carácter de modificación la alteración del precio por aplicación de cláusulas de revisión ni afectará al plazo de ejecución establecido.

Art. 152. Cuando por retraso en el comienzo de las obras sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, paralizaciones autorizadas de las obras, prórrogas de los plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualquier otra causa justificada se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, la Administración procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables de que disponga el Departamento ministerial correspondiente.

Para efectuar un reajuste de las anualidades que rigieron en el contrato será necesaria la conformidad del contratista para que la Administración pueda acordarlo.

Cualquier reajuste de anualidades exige la revisión del programa de trabajo, acoplándolo a las también nuevas circunstancias, y precisará la aprobación de la Administración.

Art. 153. Las obras accesorias o complementarias no incluidas en el proyecto que durante el curso de la obra principal la Administración estime conveniente ejecutar deberán ser objeto de contrato independiente, y, por tanto, cumplirse los trámites previstos por este Reglamento.

Exceptuase el caso de que aquéllas no excedan del 20 por 100 del precio del contrato, cuya ejecución podrá confiarse al contratista de la principal, y de acuerdo con los precios que rigieron en el contrato principal, y, en su caso, fijados contradictoriamente.

Art. 154. Cuando se hiciera precisa la modificación de un proyecto y resultaran indicios de que ello se debe a defecto o imprevisión imputable a sus autores o supervisores podrá ordenarse la práctica de una investigación por el Ministro correspondiente o por quien ostente delegación bastante al efecto, procediéndose con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo y a las normas del Departamento o Cuerpo de que se trate.

La aprobación de los proyectos por la Autoridad competente no exonera a los funcionarios responsables de los mismos por los defectos o imprevisiones en que hayan incurrido o les sean imputables.

Art. 155. Las modificaciones no autorizadas en las obras respecto a los proyectos por los que se rija su realización originarán responsabilidades de los funcionarios con arreglo a las normas a que se refiere el artículo anterior.

Los empresarios ejecutores de dichas modificaciones, con conocimiento de su irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas, vendrán obligados a su demolición si así se les ordena, e indemnizarán a la Administración, en todo caso, por los daños y perjuicios que su conducta ocasione. La responsabilidad directa de los empresarios no será obstáculo para que se exija la que corresponda al funcionario encargado de la inspección y vigilancia de las obras.

CAPITULO VI

EXTINCION DEL CONTRATO DE OBRAS

Sección 1.ª Causas y efectos de la resolución

Art. 156. El contrato de obras se extinguirá por resolución y por conclusión o cumplimiento del mismo. (artículo 51 L. C. E.).

Art. 157. Son causa de resolución del contrato de obras:

1. El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.
2. Las modificaciones del proyecto, aunque fueren sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente alteración del precio del contrato en cuantía superior en más o en menos al 20 por 100 del importe de aquél o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.
3. La suspensión definitiva de las obras, acordada por la Administración, así como la suspensión temporal de las mismas, por un plazo superior a un año, también acordada por aquélla.
4. La muerte del contratista individual.
5. La extinción de la personalidad jurídica de la Sociedad contratista.
6. La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista.
7. El mutuo acuerdo de la Administración y el contratista.
8. Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato y cualesquiera otras determinadas por esta legislación.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso, previa autorización del Consejo de Ministros, en los casos a que se refiere el artículo 21, y cumplimiento de lo previsto en el párrafo primero del artículo 51 de esta Ley. Todos los trámites e informes preceptivos de estos expedientes se considerarán de urgencia y gozarán de preferencias para su despacho por el órgano administrativo o consultivo correspondiente (artículo 52 L. C. E.).

Art. 158. El incumplimiento por la Administración de las cláusulas del contrato originará su resolución sólo en los casos previstos en esta legislación, pero obligará a aquélla, con carácter general, al pago de los perjuicios que por tal causa se le irroguen al contratista (artículo 53 L. C. E.).

En el supuesto anterior la resolución del contrato habrá de ser solicitada por el contratista para que decida la Administración, y, en su caso, los Tribunales competentes.

Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por la Administración no anularán el contrato, sino en cuanto sean denunciados por cualquiera de las partes dentro de dos meses computados a partir de la fecha del acta de comprobación del replanteo y afecten, ade-

más, al importe del presupuesto de la obra, al menos en un 20 por 100.

Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero manteniéndose invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación.

Art. 159. El incumplimiento por el contratista de cualquier cláusula contenida en el contrato autoriza a la Administración para exigir su estricto cumplimiento o bien acordar la resolución del mismo. Si ha habido dolo, fraude o engaño por parte del contratista se acordará siempre la resolución del contrato.

El incumplimiento de los plazos por parte del contratista se regulará por las reglas contenidas en la sección segunda del capítulo anterior de este Reglamento.

Art. 160. Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios (artículo 53 L. C. E.).

La fijación y valoración de éstos se verificará por aquélla en resolución motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos económicos y administrativos que ocasione a la Administración.

Art. 161. La resolución del contrato será potestativa por parte de la Administración o del contratista cuando tengan lugar modificaciones del proyecto, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 100 del importe de aquél o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. En ambos casos, cualquiera de las dos partes contratantes, si se cumplen los requisitos expuestos, deberá allanarse a la resolución cuando la otra parte reclame su derecho a la misma.

Se considerará alteración sustancial, entre otras, la modificación de los fines y características básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que afecten al 50 por 100 del importe del presupuesto.

Art. 162. Si la Administración decidiese la suspensión definitiva de las obras o dejase transcurrir un año desde la suspensión temporal sin ordenar la reanudación de las mismas, el contratista tendrá derecho al valor de aquéllas efectivamente realizadas y al beneficio industrial de las dejadas de realizar (artículo 55 L. C. E.).

Se considera como obra efectivamente realizada no sólo la que pueda ser objeto de certificación por unidades de obra terminadas, sino también las accesorias llevadas a cabo por el contratista y cuyo importe forma parte del coste indirecto a que hace mención el artículo 67 de este Reglamento, así como también los acopios situados al pie de obra.

Se entiende por beneficio industrial la cantidad resultante de aplicar el coeficiente del 6 por 100 al presupuesto de ejecución material con deducción de la baja de licitación en su caso.

El desistimiento de las obras por la Administración tendrá los mismos efectos que la suspensión definitiva de las mismas.

Transcurrido un año de la suspensión temporal, acordada por la Administración, sin haber ordenado la reanudación de las obras, el contratista tendrá opción entre solicitar la indemnización a que se refiere el artículo 148 de este Reglamento o instar la resolución del contrato con los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.

Art. 163. La muerte del contratista individual dará lugar a la resolución del contrato, salvo que los herederos ofrezcan llevarla a cabo bajo las condiciones estipuladas en el mismo. La Administración podrá aceptar o desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan derecho aquéllos a indemnización alguna por el resto de obra dejada de ejecutar.

Art. 164. La disolución o extinción por cualquier causa de las Sociedades mercantiles contratistas originará igualmente la resolución del contrato. Exceptuase el caso de que el patrimonio y organización de la Sociedad extinguida sea incorporado a otra Entidad, asumiendo esta última las obligaciones de aquélla y siempre que la nueva Entidad, en el plazo de un mes y sin necesidad de requerimiento por parte de la Administración, ofrezca llevar a cabo las obras con arreglo a las condiciones estipuladas en el contrato. La Administración puede admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso haya derecho a indemnización alguna.

Art. 165. La quiebra del contratista, sea esta persona natural o jurídica, originará siempre la resolución del contrato y se decretará, además, cuando aquélla sea culpable o fraudulenta, la pérdida de la fianza, que se ingresará en el Tesoro.

En los supuestos de suspensión de pagos, cuando el empresario se halle en condiciones de ejecutar las obras y ofrezca garantías suficientes a este fin, podrá la Administración acordar la continuación provisional de los trabajos en tanto se mantengan las expresadas circunstancias.

Art. 166. Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo de las partes, se estará principalmente a lo válidamente estipulado al efecto entre la Administración y el contratista (artículo 53 L. C. E.).

La Administración sólo deberá prestar su consentimiento a la resolución del contrato por mutuo acuerdo cuando, sin existir causas para la misma por culpa del contratista, razones de interés público u otras circunstancias de carácter excepcional, hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

El acuerdo de resolución deberá ser informado, antes de su aprobación definitiva, por la Asesoría Jurídica y la Intervención del Estado.

Art. 167. La resolución motivada por causas especiales establecidas en el contrato tendrá los efectos que en éste se establezcan, y en su defecto se regularán por las normas del presente Reglamento que sean aplicables por analogía a los supuestos que contempla.

Art. 168. En todo caso, resuelto un contrato de obras se procederá a su liquidación por el órgano de la Administración encargado de la vigilancia y dirección (artículo 53 L. C. E.).

Sección 2.ª De la recepción y liquidación de las obras

Art. 169. El contrato de obras concluye normalmente por el total cumplimiento de las recíprocas obligaciones convenidas entre la Administración y el contratista.

Art. 170. La recepción provisional de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación, y a la misma concurrirán un facultativo designado por la Administración contratante, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el contratista asistido, si lo estima oportuno, de un facultativo, y el representante de la Intervención General del Estado, en sus funciones de fiscalización de la inversión, cuya presencia será obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de 5.000.000 de pesetas y potestativa en los restantes casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido de un facultativo entre los habilitados al efecto por la Dirección General del Patrimonio del Estado, pudiendo recaer la representación de la Intervención en el propio facultativo.

Podrán ser objeto de recepción provisional aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en los plazos parciales establecidos en el contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante las dará por recibidas provisionalmente y se entregarán al uso público o servicio correspondiente, comenzando entonces el plazo de garantía (artículo 54 L. C. E.).

Del acto de la recepción provisional se dará cuenta a la Intervención General con una antelación mínima de veinte días.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista, con el fin de remediar los defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Si el contratista no hubiese cumplido se declarará resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminarse la obra en el plazo estipulado, a no ser que la Administración crea procedente concederle un nuevo plazo que será improrrogable.

Art. 171. El plazo de garantía se establecerá siempre en el contrato, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, y no podrá ser inferior a un año, salvo casos especiales (artículo 54 L. C. E.).

Durante dicho plazo cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte el facultativo de la Administración. Si descuidase la conservación y diera lugar a que peligrase la obra se ejecutarán por la propia Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios, para evitar el daño.

En los casos en que haya lugar a las recepciones provisionales parciales a que se refiere el artículo 180, el plazo de

garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas recepciones parciales.

Art. 172. Recibidas provisionalmente las obras se procederá seguidamente a su medición general y definitiva, con asistencia del contratista o de un representante suyo, formulándose por el facultativo de la Administración director de las obras en el plazo de seis meses desde la citada recepción la liquidación provisional de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato.

Esta liquidación provisional será dada a conocer al contratista dentro de los seis meses siguientes a la recepción provisional, para que en el plazo de treinta días preste su conformidad a la misma o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de nueve meses, contados a partir de la recepción provisional, deberá aprobarse por la Administración la liquidación aludida y abonarse al contratista el saldo, en su caso, resultante por el resto de la obra.

Si se produce demora en el pago de dicho saldo, el contratista tendrá derecho a percibir el interés legal del mismo a partir de los nueve meses siguientes a la recepción provisional, siempre que intime por escrito a la Administración a dicho pago.

Art. 173. Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de las obras con la concurrencia de las mismas personas a que se refiere el artículo 170, excepto del representante de la Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima oportuno asistir (artículo 55 L. C. E.).

Del acto de la recepción definitiva se dará cuenta a la Intervención General, con una antelación mínima de veinte días, indicando en el escrito, además de los datos de la inversión total, el importe total de la liquidación provisional a que se refiere el artículo anterior y el saldo resultante.

Art. 174. Si las obras se encuentran en las condiciones debidas se recibirán con carácter definitivo y quedará el contratista relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente (artículo 55 L. C. E.).

Caso contrario se procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, con señalamiento de un nuevo y último plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones, durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras sin derecho a reclamar cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al proyecto y en perfecto estado.

La recepción de las obras, cuando éstas sean de primer establecimiento, irá seguida de su inventario en el general de Bienes y Derechos del Estado.

A estos efectos se acompañará al acta de recepción definitiva un «Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada» que, a modo de resumen de la liquidación provisional practicada, defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción definitiva, el cual se incorporará al Inventario General.

Dicho documento será redactado por la dirección de las obras.

Art. 175. Si la obra se arruina con posterioridad a la recepción definitiva por vicios ocultos de la construcción debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince años.

Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista (artículo 56 L. C. E.).

Art. 176. Dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la recepción definitiva, deberá acordarse y ser notificada al empresario la liquidación final de la obra y abonarse el saldo resultante.

Si se produce demora en el pago del saldo de liquidación el contratista tendrá derecho a percibir el interés legal de dicho saldo a partir de los seis meses siguientes a la recepción definitiva, siempre que intime por escrito a la Administración a dicho pago (artículo 57 L. C. E.).

A los efectos anteriores se procederá a la valoración de las obras y trabajos ejecutados durante el plazo de garantía con arreglo a lo establecido en los presupuestos y en el pliego de prescripciones particulares del proyecto, sin que, por otra parte, la aprobación técnica de la liquidación esté supeditada a la existencia de crédito presupuestario disponible para su abono al contratista.

Art. 177. Aprobada la recepción y liquidación definitiva la Administración tomará acuerdo en relación con la fianza depositada por el contratista, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento

Sección 3.ª Normas especiales

Art. 178. En los contratos resueltos tendrán lugar las dos recepciones, la provisional, efectuada desde luego, y la definitiva, cuando haya transcurrido el plazo de garantía respecto a las obras que se hallen terminadas por completo al acordarse la resolución y fuesen susceptibles del uso o servicio de que se trate.

Para todas las demás obras que no se hallen en el caso anterior, y sea cual fuese el estado de adelanto en que se encuentren, se hará sin pérdida de tiempo una sola y definitiva recepción.

Art. 179. Iniciado el oportuno expediente de resolución de un contrato cuyas obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, se procederá seguidamente a formularse la liquidación de las mismas.

La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas, especificando las que sean de recibo y fijando los saldos pertinentes en favor o en contra del contratista.

La liquidación se notificará al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución, pudiendo impugnar la valoración en la vía administrativa procedente.

Art. 180. Cuando se verifiquen en un contrato recepciones provisionales parciales de aquellas partes de obras capaces de servir al uso o al servicio de que se trate, deberá verificarse simultáneamente una liquidación provisional parcial a cuenta de la definitiva que corresponda.

Art. 181. En aquellas obras especiales cuya perduración no tenga finalidad práctica, como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan, a los efectos de su perdurabilidad, trabajos que exceden el concepto de mera conservación, como las de dragados, la recepción provisional y definitiva podrá resumirse en un solo acto mediante una única recepción.

CAPITULO VII

DE LA CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS

Art. 182. Los derechos dimanantes de un contrato de obras podrán ser cedidos a tercero siempre que las cualidades personales o técnicas del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato (artículo 58 L. C. E.).

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían al cedente.

Art. 183. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a tercero deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que la Administración autorice expresamente y con carácter previo la cesión.
2. Que el cedente tenga ejecutado, al menos, un 20 por 100 del presupuesto total del contrato.
3. Que se formalice la cesión en escritura pública (artículo 58 L. C. E.).

Art. 184. Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas unidades de la obra (artículo 59 L. C. E.).

Art. 185. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que se dé conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquélla lo autorice previamente, a no ser que el contrato facultase ya al empresario a estos efectos.
2. Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50 por 100 del presupuesto total de la obra principal, salvo que se haya autorizado expresamente otra cosa en el contrato originario (artículo 59 L. C. E.).

Art. 186. Los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al contratista principal, que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución de la obra frente a la Administración, con arreglo al proyecto aprobado por la misma, como si él mismo la hubiese realizado.

CAPITULO VIII

EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA PROPIA ADMINISTRACION

Art. 187. Sólo podrán ser ejecutadas directamente por la Administración las obras en que concurrirá alguna de estas circunstancias:

1. Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o industriales, suficientemente aptos para la realización de la obra proyectada, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.
2. Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables en la obra y cuyo empleo suponga una economía superior al 20 por 100 del importe del presupuesto de la obra o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose en este caso, las ventajas que se sigan de la misma.
3. Que no haya habido ofertas de empresarios para la ejecución de obras calificadas de urgencia en licitación previamente efectuada.
4. Cuando se trate de la ejecución de obras que, dada su naturaleza, sea imposible la fijación previa de un precio cierto o la de un presupuesto por unidades simples de trabajo.
5. Cuando se trate de obras que se consideren de emergencia con arreglo a la presente legislación.
6. Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas unidades de obra por no haberse llegado a un acuerdo en los precios contradictorios correspondientes.
7. Las obras de mera conservación y no susceptibles por sus características, de la redacción de un proyecto.

Fuera de los supuestos a que se refieren los apartados 5 y 7 de este artículo, será inexcusable la redacción del correspondiente proyecto, aun cuando se trate de obras ejecutadas directamente por la Administración (artículo 60 L. C. E.).

Art. 188. Los proyectos de obras a ejecutar por la propia Administración se sujetarán en su elaboración, con carácter general, a los preceptos establecidos en la sección primera del capítulo II del título II, libro I de este Reglamento, para las distintas clases de las mismas: de primer establecimiento, reforma, gran reparación, reparaciones menores o de conservación.

No obstante lo anterior, se prescindirá en estos proyectos de cuantos extremos tienen como única finalidad su aplicación a una futura licitación o a regular las relaciones contractuales entre la Administración y el contratista en el desarrollo de un contrato.

Cuando se trate de obras de la clase señalada en el apartado 4 del artículo anterior, su presupuesto de ejecución será fijado de forma estimativa y la cuantía adoptada para él servirá de base para la habilitación del crédito correspondiente. Para las comprendidas en el apartado 6, su presupuesto se obtendrá tomando como base los precios fijados por la Administración en la forma señalada en el artículo 150 de este Reglamento.

Art. 189. En las obras de emergencia cuya ejecución directa por la Administración haya sido ordenada, deberá redactarse una documentación técnica descriptiva de los trabajos realizados tan pronto como las circunstancias lo permitan, y, desde luego, previamente al momento señalado en el apartado 3) del artículo 91 de este Reglamento.

Art. 190. La autorización para la ejecución de obras por Administración corresponderá a la Autoridad a quien compete la aprobación del gasto, previo informe de la Asesoría Jurídica del Departamento y fiscalización de aquél por la oficina competente de la Intervención del Estado (artículo 61 L. C. E.).

Si se trata de obras comprendidas en el número uno del artículo 187 de este Reglamento, la aprobación del gasto y de la forma de ejecución por la Autoridad competente se basará, atendiendo a la índole de los trabajos, en el oportuno informe técnico, sin que sea preceptivo el asesoramiento jurídico previo.

Art. 191. La ejecución de obras por la Administración podrá verificarse por los propios servicios de la misma mediante sus medios personales y reales o con la colaboración de empresarios particulares.

En este segundo supuesto, la Autoridad competente podrá contratar con el colaborador el objeto de su gestión o trabajo con arreglo a las siguientes modalidades:

A) Mediante el sistema de coste y costas fijado con arreglo al artículo 67, y con derecho del colaborador a una percepción económica determinada que en ningún caso será superior al cinco por ciento del total de aquéllos.

B) Contratando con la Empresa colaboradora la ejecución

de unidades completas del proyecto, instalaciones o servicios en base a un precio a tanto alzado, no superior al previsto en el proyecto.

Los contratos de colaboración tendrán naturaleza administrativa, pero no la de contratos de obras tal como se configuran en este Reglamento, ya que la responsabilidad de la ejecución de la obra seguirá recayendo íntegramente en el órgano gestor de la Administración, sin que al colaborador le alcancen otras que las derivadas del incumplimiento de las cláusulas estipuladas en su contrato o de las instrucciones que como complemento o aclaración de ellas reciba del Director de las obras. El contrato se formalizará en documento administrativo y no será obligatorio la prestación de fianza.

La elección de los colaboradores se efectuará en cuanto sea posible previa consulta a más de un empresario entre aquellos que el órgano gestor de las obras estime debidamente capacitados para estos fines.

En los casos números 1 y 2 del artículo 187 no podrá sobrepasarse en la contratación con colaboradores el cincuenta por ciento del importe total del proyecto, salvo supuestos excepcionales, que se justificarán en el expediente.

Art. 192. Las obras ejecutadas por la Administración, una vez terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo de la misma, designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la concurrencia de un representante de la Intervención General, debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a cinco millones de pesetas y potestativa en los restantes casos.

La representación de la Intervención General podrá recaer en el propio facultativo encargado de asistirlos.

Art. 193. Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación que se realicen por los propios servicios de la Administración organizados para estas atenciones y con cargo a las consignaciones que se libren periódicamente para estos fines, no estarán sujetos a los trámites y requisitos establecidos en los artículos precedentes de este capítulo.

Art. 194. La liquidación de las obras ejecutadas por la Administración y las ejecutadas por colaboradores de acuerdo con el apartado A) del artículo 191, se realizará mediante los oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos y no con arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto aprobado.

La liquidación de las obras ejecutadas con colaboradores, de acuerdo con el apartado B) del artículo 191, se realizará mediante relaciones valoradas, acompañadas por el correspondiente documento contractual donde figure el precio concertado. Su pago se hará en la forma y momento que se señalen en el respectivo contrato.

Art. 195. La adquisición de materiales, primeras materias y, en general, de todos los elementos elaborados que sean precisos para la ejecución de las obras directamente por la Administración será realizada mediante concurso o contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de los establecidos en este Reglamento para los contratos de suministro.

TITULO III

Del contrato de gestión de servicio público

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1.ª Requisitos esenciales

Art. 196. El contrato mediante el cual el Estado encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio se regulará por la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento, y por las disposiciones especiales del respectivo Servicio en cuanto no se oponga a aquéllas.

No se entenderán comprendidos en ella los supuestos de personificación de servicios mediante la creación de Entidades de derecho público destinadas a su gestión, ni aquellos en que la misma se encomienda a una Sociedad de derecho privado cuyo capital sea en su totalidad propiedad del Estado o de un ente público del Estado (artículo 62 L. C. E.).

Art. 197. Antes de proceder a la contratación de la gestión de un servicio público deberá hallarse promulgado el régimen jurídico básico del mismo que atribuya las competencias administrativas, que determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y que declare expresamente que la

actividad de que se trate queda asumida por el Estado como propia del mismo.

Art. 198. El Estado podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, todos los servicios de su competencia, siempre que tengan un contenido económico que los haga susceptibles de explotación por empresarios particulares y mientras no impliquen el ejercicio de poderes soberanos.

El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden funcional como en el territorial (artículo 63 L. C. E.).

Art. 199. Los servicios no podrán ser contratados en régimen de monopolio, salvo que una Ley lo autorice expresamente.

La gestión no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente su duración y las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que en ningún caso pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de noventa y nueve años.

Cuando el contrato de gestión de servicios comporte la existencia de gasto para el Estado, se estará a lo establecido en el artículo 21 de este Reglamento (artículo 64 L. C. E.).

Art. 200. En todo caso, la Administración del Estado conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del Servicio de que se trate (artículo 65 L. C. E.).

Sección 2.ª Modalidades de la contratación

Art. 201. La contratación de los servicios públicos adoptará cualquiera de las siguientes modalidades:

1.ª Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su riesgo y ventura.

2.ª Gestión interesada, en cuya virtud el Estado y el empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.

3.ª Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.

4.ª Mediante la creación de una Sociedad de economía mixta en que el Estado participe por sí, o por medio de un ente público estatal, en concurrencia con personas naturales o jurídicas (artículo 66 L. C. E.).

Art. 202. Incumbe al Jefe del Departamento competente determinar en cada caso la modalidad de contratación, salvo lo que establezcan sobre el particular los Reglamentos especiales propios del servicio.

Art. 203. En la concesión administrativa de servicios podrá delegar el órgano de la Administración facultades de policía en el empresario, pero sin que ello perjudique los poderes generales de inspección y vigilancia que incumban a aquél.

Contra los actos dictados por el empresario ejerciendo tales facultades podrá recurrirse en todo caso ante la Administración concedente.

Art. 204. Cuando el contrato se verifique bajo la modalidad de gestión interesada, se podrá estipular un beneficio mínimo en favor de cualquiera de las partes asociadas atendiendo a los resultados de la explotación.

Se determinará en el contrato el régimen obligacional de la gestión y en especial las responsabilidades que incumben al empresario.

Art. 205. La modalidad del concierto se utilizará en aquellos supuestos en los que para el desempeño o mayor eficacia de un servicio público convenga a la Administración contratar la actividad privada de particulares que tengan análogo contenido al del respectivo Servicio.

La duración de los conciertos no podrá ser superior a ocho años, salvo que el Gobierno acuerde expresamente un plazo superior o prorrogue el inicialmente convenido.

Art. 206. La Sociedad de economía mixta deberá aparecer como parte contratante ante el Estado con las obligaciones y derechos propios del concesionario de servicios públicos.

La promoción de estas Sociedades puede ser iniciativa del Estado, en cuyo caso las aportaciones de capital privado deberán adjudicarse conforme a las reglas de publicidad y concurrencia previstas en el presente título, y salvo que el Gobierno acuerde expresamente lo contrario, la participación estatal será siempre mayoritaria. Cuando no lo sea, se nombrará un Delegado del Gobierno cerca de la Sociedad con facultades de inspección y vigilancia oportunamente regladas.

Si el Estado adquiere participación de capital, que también deberá ser mayoritaria, en una Sociedad gestora de servicio público, se regulará la adquisición por la Ley del Patrimonio del Estado.

Art. 207. Las Sociedades de derecho privado cuyo capital pertenezca íntegramente al Estado o a un ente público estatal y que gestionen servicios públicos del Estado, no podrán enajenar títulos representativos de capital o, en modo alguno, otorgar participación en favor de personas naturales o jurídicas, sin sujeción a las normas que regulan la adjudicación de los contratos de gestión de servicios públicos.

Sección 3.ª Normas reguladoras

Art. 208. El contrato de gestión de servicios se regulará por lo establecido en el título I de la Ley de Contratos y título II de este Reglamento para el contrato de obras, en todo lo que no se oponga a las disposiciones del presente Reglamento y exceptuando los preceptos que sean privativos de la naturaleza de aquél.

Las limitaciones que para la gestión directa establece el artículo 187 de este Reglamento no serán en ningún caso de aplicación en materia de servicios (artículo 67 L. C. E.).

CAPITULO II

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREPARATORIAS DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS

Art. 209. Todo contrato de gestión de servicios públicos irá precedido de las siguientes actuaciones:

1. Elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de explotación y de las obras precisas, en su caso.
2. Tramitación y resolución del expediente de contratación, con aprobación del pliego de cláusulas de explotación a que haya de acomodarse la del servicio, en sus aspectos jurídico, económico y administrativo y, en su caso, del gasto correspondiente (artículo 68 L. C. E.).

Art. 210. Los anteproyectos de explotación deberán referirse a servicios públicos susceptibles de ser organizados con unidad e independencia funcional.

Comprenderán un estudio económico-administrativo del servicio, de su régimen de utilización y de las particularidades técnicas que resulten precisas para su definición.

Los proyectos de obras necesarias para el establecimiento del servicio, en su caso, serán redactados por la Administración o por los empresarios que opten a la adjudicación del servicio, según determinen los Reglamentos especiales, pero, en todo caso, serán de aplicación los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Contratos del Estado y los concordantes de este Reglamento.

Art. 211. Los pliegos de cláusulas de explotación deberán contemplar los siguientes puntos:

1. Servicio objeto del contrato y características de aquél.
2. Obras e instalaciones que hubiera de realizar el empresario para la debida explotación, expresando las que habrán de pasar al Estado a la terminación del contrato, en su caso.
3. Medios auxiliares que aporte la Administración, comprendiéndose por tales toda clase de obras y bienes.
4. Tarifas máximas y mínimas que hubieren de percibirse de los usuarios, con descomposición de sus factores constitutivos, y procedimientos para su revisión.
5. Clase, cuantía, plazos y formas de entrega de la subvención al empresario, si la hubiera.
6. Canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración, en su caso, o beneficio mínimo que correspondiera a alguna de las partes.
7. Plazo del contrato y prórrogas posibles, determinando con precisión la fecha en que el contrato comience a surtir sus efectos.
8. Expresa obligación del gestor de mantener en buen estado las obras e instalaciones, e indicación de las obligaciones y derechos de la Administración y del gestor.
9. En su caso, fianza provisional y definitiva a prestar por el empresario.
10. Sanciones por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato.
11. Supuestos especiales de extinción del contrato.
12. Cualesquiera otros que sean precisos según la modalidad del contrato y el objeto del mismo.
13. Expresa sumisión a la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento y remisión al pliego de cláusulas generales, si lo hubiera, en cuanto no hubiese sido derogado por el pliego de cláusulas de explotación del respectivo contrato, de conformidad con el artículo 36 de este Reglamento.
14. Mención de los Reglamentos especiales reguladores del servicio que sean de aplicación.

CAPITULO III

FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS

Art. 212. Los contratos de gestión de servicios públicos se adjudicarán ordinariamente mediante el procedimiento de concurso (artículo 69 L. C. E.).

Cualquiera que sea la modalidad de contratación deberá respetarse la forma de concurso, el cual versará sobre aquellos extremos de la operación que permita la concurrencia de ofertas de manera que la Administración pueda hacer la adjudicación en los términos más favorables.

Art. 213. La contratación directa sólo podrá tener lugar en los supuestos siguientes:

1. Aquellos servicios respecto de los que no sea posible promover concurrencia en la oferta o en que, por circunstancias excepcionales que habrían de justificarse en el expediente, no convenga promoverla.
2. Los de reconocida urgencia, surgida como consecuencia de necesidades apremiantes que demandaran una pronta puesta en marcha del servicio, que no pueda lograrse por medio de la tramitación urgente regulada en el artículo 90 de este Reglamento, previa justificación razonada en el expediente y acuerdo del Jefe del Departamento.
3. Aquellos en que la seguridad del Estado exija garantías especiales o cuyo expediente haya sido declarado secreto y no puedan realizarse directamente por la Administración.
4. Los de gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento no se prevea superior a 5.000.000 de pesetas ni su plazo de duración sea superior a dos años.
5. Los anunciados a concurso que no llegaren a adjudicarse por falta de licitadores o porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles, o porque, habiéndose adjudicado, el empresario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre que se realicen con sujeción a las mismas condiciones anunciadas, a no ser que por la Administración se acuerde sacarlas nuevamente a concurso, en las condiciones que en cada caso se establezcan (artículo 69 L. C. E.).

Art. 214. La adjudicación de los contratos de gestión de servicio público se publicará siempre en el «Boletín Oficial del Estado», y hasta tanto no surtirá efectos contra tercero,

CAPITULO IV

FORMALIZACION DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS

Art. 215. Los contratos de gestión de servicios públicos, cualquiera que sea la forma de adjudicación, una vez hayan sido aprobados por la Autoridad competente, se formalizarán en escritura pública cuando sea precisa su inscripción en un registro público o exija la ejecución de obras o instalaciones por importe superior a 2.500.000 pesetas. En los restantes casos se formalizarán en documento administrativo, sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda exigir, a su costa, la formalización del contrato en escritura pública (artículo 70 L. C. E.).

Art. 216. El documento notarial o administrativo deberá contener al menos los siguientes requisitos:

1. Autoridad administrativa y empresario interviniente con referencia a su competencia y capacidad jurídica, respectivamente.
2. Exposición detallada del servicio que haya de ser prestado por el empresario y definición de las obras que, en su caso, hayan de ejecutarse con referencia a los respectivos proyectos, los cuales obligarán al empresario en la explotación del servicio y en la ejecución de las obras.
3. Tarifas máximas y mínimas que tiene derecho a percibir el empresario y procedimiento para su revisión, así como canon que, en su caso, se establezca en beneficio del Estado o subvención que éste conceda a aquél.
4. Plazo de duración del contrato, con indicación del que dispone el empresario para el comienzo del servicio.
5. Garantías especiales prestadas o a prestar por el empresario.
6. Derechos y obligaciones de las partes.
7. Cualquier otra cláusula que la Administración estime en cada caso establecer, de conformidad con el pliego de cláusulas de explotación del servicio, y en especial las penalidades en que puede incurrir el empresario gestor.
8. Sumisión expresa del empresario a los preceptos de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento, así como al

pliego de cláusulas generales, si lo hubiere, en lo que no esté expresamente derogado por el pliego de cláusulas de explotación del respectivo contrato.

Al documento notarial o administrativo, que deberá otorgarse dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la adjudicación, se unirá el pliego de cláusulas de explotación que rija en la gestión del servicio.

CAPITULO V

EFFECTOS DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS

Sección 1.ª Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos

Art. 217. El empresario estará obligado a ejecutar las obras precisas y a organizar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos en el mismo señalados (artículo 71 L. C. E.).

También deberá redactar, en su caso, el proyecto de las obras necesarias para el establecimiento del servicio y organizarlo y explotarlo con estricta sujeción a los plazos y características establecidas en el contrato.

Art. 218. El empresario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones de carácter general:

1. Prestar el servicio con la continuidad convenida, teniendo derecho los particulares a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.

2. Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones sin perjuicio de las facultades que el artículo 200 de este Reglamento establece como de competencia de la Administración.

3. Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio. Exceptuase el caso de que tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración (artículo 72 L. C. E.).

Art. 219. El empresario tiene derecho a las prestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, en su caso, en los términos que el propio contrato establezca.

Si la Administración no otorgase al empresario la subvención prometida o no hiciese entrega de los medios auxiliares a que se obligó en el contrato, éste tendrá derecho al interés legal de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen.

Si la demora fuese superior a dos años, el empresario tendrá derecho, además, a exigir la resolución del contrato y a que se le abonen los daños y perjuicios sufridos (artículo 73 L. C. E.).

Art. 220. En interés del servicio, y cuando así se haya pactado, el empresario tiene derecho a utilizar los bienes de dominio público en la forma convenida y a ser beneficiario de la expropiación forzosa con los requisitos establecidos por la Ley reguladora de la misma.

La Administración podrá otorgarle también el beneficio de vecindad y la posibilidad de aplicar el procedimiento de apremio para la percepción de sus tarifas.

Sección 2.ª Modificación del contrato de gestión de servicios públicos

Art. 221. La Administración podrá modificar, por razón de interés público, las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al empresario de manera que se mantengan en equilibrio los supuestos económicos que presidieron la perfección de aquél.

En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio no tengan trascendencia económica, el empresario no podrá deducir reclamaciones por razón de los referidos acuerdos.

La modificación del contrato deberá ser acordada por el órgano de contratación competente, previa autorización del Consejo de Ministros, en los casos a que se refiere el artículo 21 de este Reglamento (artículo 74 L. C. E.).

Art. 222. Se consignará en el contrato el alcance de la facultad de modificar su régimen financiero que ostenta la Administración y los derechos y obligaciones que tal evento origina para las partes.

CAPITULO VI

EXTINCION DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS

Art. 223. Son causas de extinción del contrato de gestión de servicios públicos:

1. Resolución por incumplimiento del empresario o de la Administración.
2. Reversión del servicio a la Administración por cumplimiento del plazo establecido en el contrato.
3. Rescate del servicio por la Administración.
4. Supresión del servicio por razones de interés público.

(Continuará)

(Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de diciembre de 1975.)

ANUNCIOS OFICIALES

DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA DE SANTANDER

SECCION DE ENERGIA

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Santander, a petición de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», con domicilio en Bilbao, calle Gardoqui, 8, solicitando autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2.617/1966,

de 20 de octubre, sin que se haya formulado oposición u objeción,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Santander, a propuesta de la Sección de Energía, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», la instalación eléctrica siguiente: Expediente número 3.559-5.

Término municipal afectado: Guriezo.

Características principales: Centro de transformación, tipo intemperie, sobre apoyos de hormigón, denominado «Ruesos», número 300, de 25 KVA., 5.000/230-133 V., con su apartamento de protección, medida y maniobra, alimentado por la línea circuito número 3, E. T. D. «Guriezo-Aguera», y aprobar su proyecto de ejecución.

Dicha autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, Orden Ministerial de Industria de 1 de febrero de 1968, y con las condiciones generales 1.ª y 5.ª del apartado 1 y la del apartado 2 del artículo 17 del Decreto 1.775/1967, de 22 de julio.

Santander a 2 de diciembre de 1975.—El delegado provincial, Manuel Aybar Gállego.

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO DE SANTANDER

En el expediente de referencia incoado por la Inspección de Trabajo de Santander a la empresa Martín Rius Cardo por el centro de trabajo de actividad «obrador

de confitería», sito en la calle de General Dávila, 60, y Santa Clara, 8, de Santander, consta requerimiento que, en su parte bastante, dice:

R-98/75. — Requerimiento de pago de cuotas del Régimen General de la Seguridad Social, por descubierto de las cuotas de seis trabajadores, María Victorina González Peyal, Manuela de la Viña Pérez, María Isabel de la Viña Pereda, Carmen H. González Pellol, María Ascensión Allica Mijena y Flor Cantero Fernández, todos ellos afiliados a la Seguridad Social bajo la patronal 39/27422, durante el período de julio de 1974, y cuyo importe total asciende a la cantidad de veintidós mil trescientas noventa y ocho pesetas.

Asimismo, se le hace saber del derecho a impugnar este expediente mediante escrito dirigido al ilustrísimo señor delegado provincial de Trabajo de Santander en el plazo de diez días.

Y para que sirva de notificación a la empresa de don Martín Rius Cardo, de actividad obrador de confitería, sito en la calle de G. Dávila, 60, y Santa Clara, 8, de Santander, hoy cerrado y ausente sin dejar dirección, y a los efectos de su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, se expide la presente cédula de notificación, en Santander a veinticuatro de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.—El jefe de la Inspección, Vicente D. Bedia Trueba.

DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA DE SANTANDER

La Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 1975, acordó aprobar definitivamente el «proyecto de urbanización de la segunda y tercera fase de la Colonia Universidad», de esta ciudad.

Contra el presente acuerdo podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de la Vivienda, según determina el artículo 221 de la Re-

forma de la Ley del Suelo de 2 de mayo de 1975.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 35 de la vigente Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Santander, 8 de enero de 1976. El secretario de la Comisión, firmado y rubricado, R. Dapena de la Lastra.—Visto bueno, el delegado provincial-vicepresidente, firmado y rubricado, A. Zúñiga.

JEFATURA PROVINCIAL DE CARRETERAS DE SANTANDER

Expropiación forzosa

Realizado el libramiento para poder hacer efectivos los importes de «valoraciones por mutuo acuerdo» para la adquisición, por el Estado, de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución de las obras de:

CN-634, de San Sebastián a Santander y La Coruña, p. k. 26,0 al 50,0, de Santander a Oviedo.

Ensanche y mejora del firme.
Tramo: Torrelavega-Treceño.

Esta Jefatura ha resuelto efectuar el pago de las referidas valoraciones en los locales del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, en la fecha siguiente:

Día 23 de enero de 1976.

Hora: De once treinta a trece.

Los interesados deberán ser portadores de su Documento Nacional de Identidad y, en aquellos casos en que no sea el titular quien comparezca, se deberá presentar el poder suficiente para efectuar el cobro y actuar en nombre de la persona o entidad a quien represente.

Santander, 31 de diciembre de 1975.—El ingeniero jefe (ilegible).

JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL DE SANTANDER

Don Marcelino Souto Naveira, secretario de la Junta Municipal del Censo Electoral de Santander,

Certifico: Que en el día de hoy tuvo lugar la siguiente:

«Acta de sesión de la Junta Municipal del Censo Electoral.

En la ciudad de Santander a dos de enero de mil novecientos setenta y seis.

Siendo la hora de las diez de la mañana se reunieron, convocados al efecto para constituir la Junta Municipal del Censo Electoral de este término para el bienio 1976-77, y bajo la presidencia del señor juez municipal número uno, don Rómulo Martí Gutiérrez, y asistencia de mí, el infrascrito secretario, don Marcelino Souto Naveira, los señores que a continuación se expresan y que son los designados al efecto, con arreglo a los artículos 11 y 12 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907, en relación con el Decreto de 29 de septiembre de 1945, en el concepto que respecto de cada uno también se determina, a saber:

Don Ramón Quintana Uriarte, concejal de mayor edad.

Don Baldomero Madrazo Feliú, presidente del Sindicato de Aguas, Gas y Electricidad.

Don Ramón Fernández González, presidente del Sindicato Provincial de Cereales.

No lo hace don Bartolomé Campos Gonzalo, representante de las clases pasivas, por encontrarse indispuerto.

Suplentes:

Don Francisco Montes Sánchez, como suplente de don Ramón Quintana Uriarte.

Don Carlos López López, como suplente de don Baldomero Madrazo Feliú.

Doña Carmen Andérez González, como suplente de don Ramón Fernández González.

Don Rufino Borrego Rodríguez, como suplente de don Bartolomé Campos Gonzalo.

Abierto el acto, el señor presidente declaró constituida, en forma legal, para el bienio 1976-77, la Junta Municipal del Censo Electoral de Santander con los señores anteriormente reseñados, y que éstos quedaban posesionados de sus cargos.

Seguidamente se dio también posesión del cargo de vicepresidente a don Ramón Quintana Uriarte, a quien como concejal del

Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, le corresponde desempeñar dicho cargo por ministerio de la Ley.

Por último, usando la Junta de la facultad que le concede el párrafo 4.º del artículo 11 de la Ley Electoral, acordó, por unanimidad, designar la sala de audiencia del Juzgado Municipal número uno para la celebración de sus sesiones, en tanto en cuanto el Excelentísimo Ayuntamiento no acondicione en forma los locales adquiridos en la Plaza de Juan José Ruano para la instalación de la misma, habida cuenta de las dificultades que entrañará, especialmente la labor de secretaría, el desenvolvimiento de las múltiples actividades que habrán de desarrollarse a partir de ahora con motivo la convocatoria electoral hecha por el Gobierno de la nación, y las sucesivas que, sin duda, habrán de tener lugar el corriente año, dado que, careciendo el Palacio de Justicia, como es público y notorio, de espacio material, y existiendo grandes dificultades para acomodar, incluso, al personal auxiliar, no es posible en modo alguno, sin grave quebranto de las funciones judiciales y de las de la propia Junta Municipal, llevar a cabo las espinosas, delicadas y múltiples funciones asignadas a la misma.

Y, asimismo, sopesando las razones aducidas por el señor juez-presidente y los graves inconvenientes que se derivarán caso de tener que seguir actuando en los locales del Juzgado, la Junta, igualmente por unanimidad, acordó facultar al vicepresidente, señor Quintana Uriarte, para que, en su condición de representante del Excmo. Ayuntamiento, recabe urgentemente de la Ilustre Corporación Municipal el que se acuerde iniciar, cuanto antes sea posible, la realización de las necesarias obras de acondicionamiento, en debida forma, del bajo adquirido para instalación de esta Junta.

Y cumplido el objeto de la convocatoria, se dio por finalizada la sesión, firmando la presente acta los señores concurrentes, de lo

que yo, el secretario, certifico.— Hay varias firmas ilegibles.

Es fotocopia del original, al que me remito. Y para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente, en Santander a dos de enero de mil novecientos setenta y seis.—El secretario, Marcelino Souto Naveira.

11

JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL DE RUESGA

Don Javier Menchaca Cabarga, secretario de la Junta Municipal del Censo Electoral de Ruesga (Santander),

Certifico: Que en el día de hoy se ha constituido la Junta Municipal del Censo Electoral de este Municipio, de cuyo acto se ha levantado el acta que, literalmente transcrita, dice así:

«Acta de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral de Ruesga (Santander).

Al margen: Don José Manuel Alonso Vega, don Manuel Expósito Trueba, don Agustín Gómez Arredondo, don José Manuel Lastra Llerena, don José Ramón Rodríguez Peña, don Antonio Martínez Gutiérrez, don Alfredo Río Sierra, don Antonio Ocejo Cano, don Angel Núñez Cedrún.

En Ruesga (Santander) a dos de enero de mil novecientos setenta y seis, siendo las dieciséis horas y treinta minutos, se reunieron en la sala audiencia del Juzgado de Paz los señores que anteriormente se expresan, bajo la presidencia del señor juez de paz don José Manuel Alonso Vega, asistido de mí, el secretario, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación electoral vigente, y proceder a la constitución de la nueva Junta Municipal del Censo Electoral de este Municipio para el bienio que se inicia en esta fecha.

Enterados los reunidos del objeto de la convocatoria, se procedió a la constitución con los señores comparecientes de la expresada Junta, de acuerdo con las normas vigentes al efecto, teniendo asimismo en cuenta las normas

dictadas por la Junta Provincial del Censo Electoral, y leídas las comunicaciones remitidas por la Alcaldía a la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de este Ayuntamiento, la Junta quedó constituida en la siguiente forma: Presidente, don José Manuel Alonso Vega; vicepresidente primero, don Manuel Expósito Trueba, concejal de mayor edad; vicepresidente segundo, don José Ramón Rodríguez Peña; concejal vocal titular, don Manuel Expósito Trueba; concejal vocal suplente, don Agustín Gómez Arredondo; representante clases pasivas, don José Manuel Lastra Llerena; idem suplente, don José Ramón Rodríguez Peña (ex-juez); vocal por rústica, don Antonio Martínez Gutiérrez; vocal por rústica suplente, don Alfredo Río Sierra; vocal presidente gremios, don Antonio Ocejo Cano; idem suplente, don Angel Núñez Cedrún.

A continuación, el señor presidente declaró que los relacionados, previa aceptación, quedan poseídos de sus respectivos cargos. Con lo cual se dio por terminado el acto, del que se levanta la presente acta, acordándose envío de copia certificada de la misma al Ilmo. Sr. Presidente de la Junta Provincial del Censo Electoral y al Excmo. Sr. Gobernador civil, para que, si a bien lo tiene, ordene su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que quienes se consideren agraviados o indebidamente postergados recurran en el término de diez días ante la Junta Provincial del Censo Electoral. En prueba de ello firman todos los señores asistentes, con el presidente, de que doy fe.—Firmados y rubricados todos los señores asistentes.»

Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, expido la presente, de orden y visada por el señor juez de paz, en Ruesga a dos de enero de mil novecientos setenta y seis. El presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral, José Manuel Alonso Vega.—El secretario, Javier de Menchaca Cabarga. 26

**JUNTA MUNICIPAL
DEL CENSO ELECTORAL
DE SAN VICENTE
DE LA BARQUERA**

Testimonio del acta de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral.

«En San Vicente de la Barquera, a las doce horas del día dos de enero de mil novecientos setenta y seis, previa convocatoria personal, se reunieron en el local sala de audiencia del Juzgado Comarcal los señores don Reinaldo Bedoya González, don Cándido Gutiérrez Fernández, don Mauricio Noriega Rubio, don Gumersindo Gutiérrez González, don José Peña Sierra, don Paulino Asterloa Uriondo y don Jesús Santovenia Andrés, bajo la presidencia de don Juan José González Amondaraín, asistido del infrascrito secretario doña María Victoria González Castrillo, excusando legalmente su asistencia don Manuel Cortabitarte Balbín y don Manuel Antonio Noriega Iglesias, y no han asistido ni excusado su asistencia don Manuel Castro González, don Julio Barrio Saiz y don Juan José Noriega Rancaño, a fin de proceder a la constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 de la vigente Ley Electoral de 8 de agosto de 1907, en la forma establecida por el artículo 11 de la misma Ley, modificado por Decreto de 29 de septiembre de 1945.

En vista de haber número suficiente de concurrentes para celebrar reunión, a tenor del citado artículo 13, el presidente declaró abierta la sesión y ordenó, como así se hizo, se diese lectura al Decreto de referencia y disposiciones concordantes de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907, y en pleno conocimiento de cuanto regula legalmente esta materia, el propio señor presidente declaró constituida la Junta Municipal del Censo Electoral de esta localidad, en la siguiente forma e investidos los señores designados de las prerrogativas inherentes a los cargos que, respectivamente, se señalan:

Presidente, don Juan José Gon-

zález Amondaraín, juez comarcal de esta villa.

Vocal y vicepresidente primero, don Reinaldo de Bedoya González, concejal de mayor edad del Ayuntamiento.

Suplente (en concepto de vocal), don Antonio Noriega Iglesias, de igual condición.

Vocal, don Manuel Castro González, en concepto de antiguo juez municipal.

Suplente, don Julio del Barrio Saiz, de igual condición.

Vocal, don Cándido Gutiérrez Fernández, en concepto de mayor contribuyente.

Suplente, don Mauricio Noriega Rubio, por igual concepto.

Vocal, don Gumersindo Gutiérrez González, por igual concepto.

Suplente, don José Peña Sierra, por igual concepto.

Vocal, don Manuel Cortabitarte Balbín, por la Cofradía de Pescadores.

Suplente, don Paulino Astarloa Uriondo, por igual concepto.

Vocal, don Jesús Santovenia Andrés, por la Delegación de Sindicatos.

Suplente, don Juan José Noriega Rancaño, por igual concepto.

Vicepresidente segundo, el vocal de la Junta don Jesús Santovenia Andrés, por elección secreta entre los concurrentes:

Secretario, doña María Victoria González Castrillo, secretario del Juzgado Comarcal.

Los reunidos aceptan los cargos que por el ministerio de la Ley acaban de serles conferidos, y prometen desempeñarlos con el celo y ecuanimidad que exige la importante función que se les encomienda.

Asimismo, y debiendo designarse el local donde la Junta habrá de celebrar sus sesiones, se acordó tuviesen éstas lugar en la sala de audiencia del Juzgado Comarcal.

De todo lo cual se levanta la presente acta, que, después de leída y hallada conforme, la firman los señores concurrentes, con el visto bueno del presidente, de todo lo cual yo, el secretario, doy fe.»—Siguen firmas y rúbricas.

Es copia literal del acta original respectiva, de que certifico.—El secretario, María Victoria González Castrillo.—Visto bueno, el presidente, Juan José González Amondaraín.

**JUNTA MUNICIPAL
DEL CENSO ELECTORAL
DE LIÉRGANES**

Don Manuel Sánchez Casielles, secretario del Juzgado de Paz de Liérganes y de la Junta Municipal del Censo Electoral,

Certifico: Que en el expediente de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral para el bienio 1976-77 obra el acta que, literalmente copiada, dice así:

«Acta.—En Liérganes a dos de enero de mil novecientos setenta y seis, siendo la hora señalada, se reunieron en la sala de audiencia del Juzgado de Paz los señores don Luis Venero Sota, don Jesús González Aja, don Manuel Bordás Higuera, don Santiago Rego Gómez, don Alfonso Fernández Haro, don Antonio Muñoz Gutiérrez, don José María Martínez Venero y don Martín Díaz Gutiérrez, bajo la presidencia del señor juez de paz, don Benigno Cantolla Lavín, con asistencia de mí, el secretario, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la legislación electoral vigente, procediendo a la constitución de la nueva Junta Municipal del Censo Electoral de este municipio, durante el bienio que se inicia en esta fecha.

Enterados los reunidos, se procedió a la constitución con los señores comparecientes de la expresada Junta, según lo ordenado en las normas vigentes, teniendo en cuenta también las normas dadas por la Junta Provincial del Censo Electoral y leídas las comunicaciones remitidas por la Alcaldía a la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de este término municipal, la Junta queda constituida del modo siguiente: presidente, don Benigno Cantolla Lavín, juez de paz; concejal vocal titular, don Luis Venero Sota, vicepresidente primero; concejal vocal suplente, don Jesús González Aja, y al no existir representante

de clases pasivas se designó al ex-juez de paz don Manuel Bordás Higuera, y como suplente a don Santiago Rego Gómez; por Urbana, vocal, don Alfonso Fernández Haro; por Urbana, vocal suplente, don Antonio Muñoz Gutiérrez; por la representación de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, vocal titular, don José María Martínez Venero; vocal suplente del anterior, don Martín Díaz Gutiérrez.

A continuación, el señor presidente declaró que los relacionados, previa aceptación, quedan posesionados de sus respectivos cargos. Con lo que se da por terminado este acto, y del mismo se levanta la presente acta, acordándose se dé cuenta al ilustrísimo señor presidente de la Junta Provincial del Censo Electoral y se remita certificación al Excmo. señor Gobernador civil de la provincia, para su publicación en el «Boletín Oficial», con el fin de que, quienes se consideren agraviados, o indebidamente postergados, recurran, en el término de diez días, ante la Junta Provincial del Censo Electoral.

Y en prueba de ello, se extiende de la presente acta, que firman todos los que la intervienen, de lo que yo, secretario, certifico.— Siguen las firmas.» (Rubricados.)

Así resulta del original, a que me remito. Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, expido la presente, en Liérganes a dos de enero de mil novecientos setenta y seis.—El secretario, Manuel Sánchez Casielles.—Visto bueno, el presidente, Benigno Cantolla Lavín.

22

JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL DE MEDIO CUDEYO

Don Manuel Sánchez Casielles, oficial en funciones del Juzgado Comarcal y de la Junta Municipal del Censo Electoral de Medio Cudeyo (Santander), Certifico: Que en el expediente de constitución de la Junta Municipal del Censo Electoral para el

bienio 1976-77 obra el acta que, literalmente copiada, dice así:

Acta.—En Medio Cudeyo a dos de enero de mil novecientos setenta y seis, siendo la hora señalada, se reunieron en la sala de audiencia del Juzgado Comarcal los señores don Federico Cuadrado Callejo, don Carlos de la Sota Gómez, don Valeriano Martín Martín, don Plácido Peña Peña, don Luis Santiago Cabarga, don Pedro Bedia Higuera, don José Antonio Corrales Madrazo y don Braulio Bolívar Guerra, bajo la presidencia del señor juez comarcal titular, don Remigio Mazorra Vázquez, con asistencia de mí, el secretario, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la legislación electoral vigente, procediendo a la constitución de la nueva Junta Municipal Electoral de este Municipio, durante el bienio que se inicia en esta fecha.

Enterados los reunidos, se procedió a la constitución con los señores comparecientes a la formación de dicha Junta, según lo ordenado en las normas vigentes, teniendo en cuenta también las normas dadas por la Junta Provincial del Censo Electoral, y leídas las comunicaciones remitidas por la Alcaldía y Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de este término municipal, la Junta queda constituida del modo siguiente: presidente, don Remigio Mazorra Vázquez, juez comarcal titular; concejal vocal titular, don Federico Cuadrado Callejo, vicepresidente primero; concejal vocal suplente, don Carlos de la Sota Gómez; representante de Clases Pasivas, vocal titular, don Valeriano Martín Martín, vicepresidente segundo; representante de Clases Pasivas, vocal suplente, don Plácido Peña Peña; por Rústica, vocal titular, don Luis Santiago Cabarga; por rústica, vocal suplente, don Pedro Bedia Higuera; por Gremios Industriales, vocal titular, don José Antonio Corrales Madrazo; por Gremios Industriales, vocal suplente, don Braulio Bolívar Guerra.

A continuación, el señor presidente declaró que los relacionados, previa aceptación, quedan

posesionados de sus respectivos cargos. Con lo que se da por terminado el acto, y del mismo se levanta la presente acta, acordándose se dé cuenta al Ilmo. Sr. presidente de la Junta Provincial del Censo Electoral—de la constitución de la nueva Junta Municipal del Censo Electoral, y se remita certificación al Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, para su publicación en el «Boletín Oficial», con el fin de que, quienes se consideren agraviados, o indebidamente postergados, recurran en el término de diez días ante la Junta Provincial del Censo Electoral.

Y en prueba de ello, se extiende la presente, que firman todos los que la intervienen, de lo que yo, secretario, certifico. Siguen las firmas. (Rubricados.)

Así resulta del original, a que me remito. Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, expido la presente, en Medio Cudeyo a dos de enero de mil novecientos setenta y seis.—El secretario, Manuel Sánchez Casielles. — Visto bueno, el presidente, Remigio Mazorra Vázquez.

23

ANUNCIOS DE SUBASTA

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SANTANDER

Anuncio de subasta

Objeto.—Alcantarillado en San Vicente de la Barquera (segunda subasta).

Tipo.—1.000.000 de pesetas.

Plazo de ejecución.—Tres meses.

Garantías.—La provisional, pesetas 30.000. La definitiva se constituirá de conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Contratación.

Modelo de proposición. — Don, vecino de....., calle de....., número....., en nombre propio (o en nombre y representación de, domiciliado en....., calle de, número.....), se compromete

a ejecutar las obras de....., con estricta sujeción al proyecto, pliego de condiciones y demás documentación, en la cantidad de..... (en letra pesetas). Señalando como domicilio para oír notificaciones en Santander el de don....., calle de....., número..... (para los domiciliados fuera de Santander).

(Fecha y firma).

Se acompañará declaración de capacidad y compatibilidad, de acuerdo con los artículos 4.º y 5.º del Decreto de 9 de enero de 1953.

Presentación de plicas y examen de documentación.—En la oficina de Contratación y Compras de la Diputación de Santander, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en horas de nueve a trece.

Apertura de plicas.—A las once horas del día siguiente hábil a aquel en que terminó el plazo de presentación, en el salón de sesiones de la Diputación de Santander.

Reclamaciones.—Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia se admitirán reclamaciones contra el pliego de condiciones, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto de 9 de enero de 1953.

En el caso de presentarse reclamaciones se suspenderá la presente licitación, procediéndose a nuevo anuncio de subasta una vez resueltas las mismas.

Santander, 9 de enero de 1976. El presidente, Modesto Piñeiro Ceballos. — El secretario, Ricardo Alonso Fernández.

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SANTANDER

Anuncio de subasta

Objeto.—Primera fase de saneamiento en Vargas, Ayuntamiento de Puente Viego.

Tipo.—1.847.824 pesetas.

Plazo de ejecución.—Seis meses.

Garantías.—La provisional, pesetas 36.956. La definitiva se constituirá de conformidad con el artículo 82 del Reglamento de Contratación.

Modelo de proposición. — Don....., vecino de....., calle de....., número....., en nombre propio (o en nombre y representación de....., domiciliado en....., calle de....., número.....), se comprometo a ejecutar las obras de....., con estricta sujeción al proyecto, pliego de condiciones y demás documentación, en la cantidad de..... (en letra pesetas). Señalando como domicilio para oír notificaciones en Santander el de don..., calle de..., número... (para los domiciliados fuera de Santander).

(Fecha y firma).

Se acompañará declaración de capacidad y compatibilidad, de acuerdo con los artículos 4.º y 5.º del Decreto de 9 de enero de 1953.

Presentación de plicas y examen de documentación.—En la oficina de Contratación y Compras de la Diputación de Santander, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en horas de nueve a trece.

Apertura de plicas.—A las once horas del día siguiente hábil a aquel en que terminó el plazo de presentación, en el salón de sesiones de la Diputación de Santander.

Reclamaciones.—Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia se admitirán reclamaciones contra el pliego de condiciones, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto de 9 de enero de 1953.

En el caso de presentarse reclamaciones se suspenderá la presente licitación, procediéndose a nuevo anuncio de subasta una vez resueltas las mismas.

Santander, 9 de enero de 1976. El presidente, Modesto Piñeiro Ceballos. — El secretario, Ricardo Alonso Fernández.

AYUNTAMIENTO DE REOCIN

Anuncio de concurso

Objeto.—Se saca a concurso público la adquisición de un vehículo automóvil «todo terreno» para el Servicio de Obras de este Ayuntamiento, con arreglo a las condiciones técnicas y las carac-

terísticas que se hallan unidas al expediente.

Duración del contrato.—La entrega del vehículo tendrá lugar en el plazo de dos meses, a partir de la notificación de la adjudicación del concurso.

Forma de pago.—El importe de la adjudicación será abonado contra certificación facultativa y previa constitución de la garantía definitiva por parte del adjudicatario.

Tipo de licitación. — El precio o tipo, a título orientativo y a efectos de fijación de fianza, etc., será el de 416.600 pesetas, alrededor del cual versarán las ofertas o proposiciones, pudiendo ser mejorado por los licitadores, pero sin que el mismo vincule a la Corporación.

Facultad de seleccionar de la Corporación.—La Corporación se reserva la facultad de seleccionar entre las ofertas presentadas las que considere más ventajosas, no solamente desde el punto de vista económico, sino especialmente desde el punto de vista técnico y funcional, pudiendo, incluso, dejar desierto el concurso si apreciare que las ofertas no reunían las condiciones del pliego, especialmente las técnicas.

Fianzas provisional y definitiva. La fianza provisional será de pesetas 8.332, y la definitiva, del 4 por 100 del precio de la adjudicación.

Riesgo y ventura.—El contrato se entiende a riesgo y ventura del contratista, conforme al artículo 57 del Reglamento de Contratación.

Gastos de anuncios y otros.—El adjudicatario vendrá obligado a pagar los gastos de anuncios y otros, conforme dispone el artículo 47 del Reglamento de Contratación.

Pliego de condiciones.—Estará expuesto en la Secretaría municipal por plazo de ocho días, y si se presentasen reclamaciones y se estimaran, se suspendería el concurso.

Presentación de proposiciones y apertura de plicas.—Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento de Reocín en horas de oficina, de nueve a tre-

ce, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, y la apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas del día siguiente hábil al del término de presentación de proposiciones, en el Ayuntamiento de Reocín.

Modelo de proposición

Don....., vecino de....., en nombre propio (o en representación de.....), enterado del concurso convocado por el Ayuntamiento de Reocín para la adquisición de un vehículo automóvil «todo terreno» para el Servicio de Obras de dicho Ayuntamiento, se compromete a suministrar el mismo, con entera sujeción al pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas que rigen el concurso, en el precio de..... (en letra y número) pesetas, y con las características que asimismo se especifican en pliego y anexo adjunto.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Consignación presupuestaria.—Hay prevista en el presupuesto ordinario la cantidad necesaria para el pago de esta obligación.

Autorizaciones.—Se han solicitado y obtenido las autorizaciones necesarias para la validez del contrato.

Reocín, 11 de enero de 1976.—
El alcalde, Manuel Rubín.

AYUNTAMIENTO DE MOLLEDO

Resolución del Ayuntamiento de Mollado por la que se anuncia concurso para el suministro de materiales con destino a la obra de «aguas a Villordún»

En cumplimiento de lo ordenado por el Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 2 de septiembre de 1975, se anuncia concurso para el suministro de materiales, de acuerdo con la relación existente en esta Secretaría del Ayuntamiento con destino a las obras de «traída de aguas a Villordún».

Tipo de licitación.—125.000 pesetas.

Fianza provisional, 5.000 pesetas.

Fianza definitiva, el 6 por 100 del precio de adjudicación.

Proposiciones.—Podrán concurrir aquellos profesionales que se hallen dados de alta en el correspondiente epígrafe fiscal.

Presentación de plicas.—Durante el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en sobre cerrado y lacrado, en el que figurará «Proposición para tomar parte en el concurso de suministro de materiales a Villordún».

Apertura de plicas.—Tendrá lugar el día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presentación de plicas, a las once horas.

Relación de obras.—Se acompañará relación de obras ejecutadas por el ofertante, especialmente de obras municipales y suministros de materiales similares al de este concurso.

El Ayuntamiento podrá efectuar la adjudicación del remate o declararlo desierto, en ambos casos libremente, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto de 9 de enero de 1953 y, concretamente, el artículo 37,8.º del mismo.

Modelo de proposición

Don....., con domicilio en....., con Documento Nacional de Identidad número....., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de.....), toma parte en el concurso de suministro de materiales para «aguas a Villordún», a cuyos efectos hace constar: se ofrece a suministrar los materiales indicados por la cantidad de..... pesetas.

Acompaña relación de suministros efectuados a otros clientes.

Declara, a los efectos de los artículos 4.º y 5.º del Reglamento de Contratación de 9 de enero de 1953, no hallarse comprendido en ninguno de los casos de incapacidad e incompatibilidad previstos en los artículos mencionados.

(Fecha y firma del proponente.)
Mollado, 7 de enero de 1976.—
El alcalde (ilegible).

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DE TRUCIOS

Rectificación de anuncio

Las subastas de productos forestales que se citan, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 148, de fecha diez de diciembre, para subastarse el 12 de enero, se subastarán a los veinte días hábiles de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en las mismas condiciones del anuncio dicho:

Monte La Tejera, número 52 del C. U. P.; lugar, Alto de La Escrita; explotación directa del Ayuntamiento; especie, eucalipto; volumen en metros cúbicos, 1.459; tipo base, 1.500.000 pesetas.

Mismo monte: lugar, Tablado; consorciante, Eugenio Elosúa; especie, pino y eucalipto; volumen en metros cúbicos, 573 y 35; tipo base, 690.000 pesetas.

Mismo monte: lugar, Tablado; consorciante, Julio Aguirre; especie, pino; volumen en metros cúbicos, 949; tipo base, 1.330.000 pesetas.

Villaverde de Trucíos a 2 de enero de 1976.—El alcalde (ilegible).

JUNTA VECINAL DE ARGOMILLA DE CAYON

Ejercitando acuerdo de esta Junta Vecinal, se hace saber que desde el día siguiente al en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, y durante los veinte días hábiles siguientes, se admiten proposiciones para optar a la subasta de las obras para un campo polideportivo, con arreglo a los pliegos de condiciones que obran en el sitio de costumbre, por un presupuesto de 452.321 pesetas.

La apertura de plicas se verificará el día siguiente de transcurrido el plazo de admisión de proposiciones.

Argomilla de Cayón a 9 de enero de 1976.—El presidente (ilegible).

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

AUDIENCIA TERRITORIAL DE BURGOS

Sala de lo Contencioso - Administrativo

Edicto

Por el presente anuncio, se hace saber que ante esta Sala se ha incoado recurso contencioso-administrativo con el número 1 de 1976, interpuesto por doña María Isabel García Gutiérrez y otras, representadas por el procurador señora Alvarez Omaña, y seguido con la Administración General del Estado, contra resolución del Tribunal Económico - Administrativo de Santander, de fecha 30 de agosto de 1975, dictada en la reclamación interpuesta contra acuerdo del delegado de Hacienda, recaído en expediente de devolución promovido en liquidaciones del impuesto general sobre transmisiones patrimoniales.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento de cuantas personas o entidades puedan estar legitimadas como demandadas o coadyuvantes, con el fin de que les sirva de emplazamiento y puedan comparecer, si les conviniere, según lo establecido en los artículos 60, 64 y 66 de la vigente Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Burgos a 3 de enero de 1976.— El secretario, Antonio Tudanca. Visto bueno, el presidente (ilegible).

AUDIENCIA TERRITORIAL DE BURGOS

Sala de lo Contencioso - Administrativo

Edicto

Por el presente anuncio, se hace saber que ante esta Sala se ha incoado recurso contencioso-administrativo con el número 450 de 1975, interpuesto por la Cooperativa Industrial Textil «Jolguer», representada por don Eugenio Gutiérrez Díez de Baldeón, contra la

Resolución del excelentísimo señor Ministro de Trabajo, de fecha 3 de noviembre de 1975, en recurso de alzada interpuesto contra la dictada por la Dirección General de la Seguridad Social, de 9 de abril anterior, desestimando la impugnación del acta de la Delegación de Trabajo de Santander, número 1.719/1972, imponiendo a la recurrente la sanción de cien mil pesetas.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento de cuantas personas o entidades puedan estar legitimadas como demandadas o coadyuvantes, con el fin de que les sirva de emplazamiento y puedan comparecer, si les conviniere, según lo establecido en los artículos 60, 64 y 66 de la vigente Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Burgos, 30 de diciembre de 1975. El secretario, Antonio Tudanca. Visto bueno, el presidente (ilegible).

AUDIENCIA TERRITORIAL DE BURGOS

Sala de lo Contencioso - Administrativo

Edicto

Por el presente anuncio, se hace saber que ante esta Sala se ha incoado recurso contencioso-administrativo con el número 449 de 1975, interpuesto por la Cooperativa Industrial Textil «Jolguer», representada por el procurador de los Tribunales don Eugenio Gutiérrez Díez de Baldeón, y seguido con la Administración General del Estado, contra la Resolución del excelentísimo señor Ministro de Trabajo, de 3 de noviembre de 1975, la de la Dirección General de la Seguridad Social, de 9 de abril del mismo año, y contra el acta de la Inspección de Trabajo de Santander, de 18 de junio de 1974, sobre imposición de sanción de 205.000 pesetas, por infracciones al Reglamento General de Faltas y Sanciones del Régimen General de la Seguridad Social.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento

de cuantas personas o entidades puedan estar legitimadas como demandadas o coadyuvantes, con el fin de que les sirva de emplazamiento y puedan comparecer, si les conviniere, según lo establecido en los artículos 60, 64 y 66 de la vigente Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Burgos, 31 de diciembre de 1975. El secretario, Antonio Tudanca. Visto bueno, el presidente (ilegible).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION DE SANTOÑA

Don Emilio de Cossío Blanco, juez de Primera Instancia de Santoña,

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia de Santoña se tramita, con el número 109/75, expediente de dominio para la reanudación del tracto registral e inscripción del exceso de cabida de las fincas que se expresarán, instado por el procurador doña Carmen Sosa, en nombre y representación de don Julio Prieto Vegas, mayor de edad, maestro nacional, casado con doña María del Pilar Hermosilla Casado y vecino de Auñón (Guadalajara):

Urbana: Casa habitación en el barrio de Gama, pueblo de Bárcena de Cicero, señalada con el número 6 de población y compuesta de planta baja, piso principal y desván. Ocupa una superficie de 90 metros cuadrados y tiene una corralada y huerta que, en junto, miden 3 carros y 6 centésimas de carro, equivalentes a 5 áreas y 48 centiáreas. Todo forma una sola posesión, que linda: Norte, terreno a huerto de Emilia Fonfría; Sur, carretera general de Santander a Bilbao; Este, la finca que a continuación se describe, y por el Oeste, casa y corralada de Emilia Fonfría.

Rústica: Un lote de terreno inculto, en el barrio de Gama, pueblo de Bárcena, Ayuntamiento de Bárcena de Cicero, que según el título mide medio carro, equivalente a 89 centiáreas y 50 mi-

líareas, pero que por accesión y en virtud de deslinde practicado por la Jefatura de Costas y Puertos del Norte arrojó una superficie de seis áreas y treinta miliareas, lindando: Norte y Este, con zona marítimo terrestre; Sur, carretera general de Santander a Bilbao, y por el Oeste, la casa y posesión anteriormente descrita. A lo largo de todo su lindero Este, y en una anchura de 6 metros, se halla gravada con servidumbre legal de vigilancia y salvamento.

Y por resolución de esta fecha se ha acordado citar por medio del presente edicto a los titulares registrales y catastrales de ambas fincas, por terceras partes, don Joaquín, don Froilán y don Vicente Vegas Palacio, residentes en Lima, así como a cuantas personas ignoradas pueda afectar dicho expediente y perjudicar la inscripción que se solicita en el Registro de la Propiedad de Santoña, a fin de que en el término de diez días, a partir de la publicación de este edicto, puedan comparecer en referido expediente para alegar lo que a su derecho conviniere, en orden a la pretensión formulada.

Dado en Santoña a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.—El juez de Primera Instancia, Emilio de Cossío Blanco.

ADMINISTRACION MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

«Construcciones Puntal» y copropietarios solicitan permiso de este Excmo. Ayuntamiento para instalar dos ascensores principales, de 6 CV., y uno de servicio, de 5 CV., en Pérez Galdós (calleja Salazar, Sur).

Durante el plazo de diez días se admitirán reclamaciones.

Santander, 3 de enero de 1975. El alcalde (ilegible).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 2 de los corrientes, ha aprobado la modifi-

cación de la Ordenanza Fiscal en vigor sobre licencias de obras.

Las tarifas y ordenanza modificada permanecerán expuestas al público en la Oficina Interventora durante quince días, a efectos de reclamaciones por los interesados legítimos.

Santander, 3 de enero de 1976. El alcalde (ilegible).

AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS

Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 27 de septiembre de 1974.

Se aprobaron los borradores de actas de sesiones anteriores.

Se dio lectura de la correspondencia oficial más importante y disposiciones publicadas en los «Boletines Oficiales» desde la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación.

Se acuerda, por razones de urgencia, contratar directamente las obras de defensa del río Pas a su paso por diversas localidades del término.

Considerando la cuantía del presupuesto y lo previsto en el número 6 del artículo 41 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, se acordó contratar directamente los trabajos de colocación de verjas y ventanas de la Casa Consistorial.

Se acuerda la adquisición de dos estufas con destino a oficinas municipales.

Se informó favorablemente el expediente tramitado a instancia de don Valentín Pardo para instalar un depósito de gas propano en grupos de viviendas sitas en Renedo.

Se informa expediente tramitado a instancia de don Julio Seco García para instalación de nave industrial dedicada a carpintería.

Visto el oportuno expediente, se acordó la devolución de la fianza depositada por don Casimiro Revuelta Abascal, contratista de las obras de reparación del cami-

no de acceso a la ermita de Nuestra Señora la Virgen de Valencia.

Dada cuenta la propuesta de la Comisión Municipal de Becas, se procedió a la adjudicación de las mismas a diversos estudiantes.

Se acuerda que se inicien los estudios correspondientes a efectos de proceder a modificación de ordenanzas fiscales.

Por razones de urgencia, se trataron los siguientes asuntos que no fueron incluidos en el orden del día:

Contratar los trabajos necesarios a efectos de dotar de agua a las viviendas de Renedo.

Oído el informe de la Comisión Municipal de Obras, se determinaron los caminos vecinales en los cuales se van a efectuar las obras de reparación y ensanche, obras éstas incluidas en el Plan de Cooperación.

Notas de la Presidencia.

El secretario (ilegible).—El alcalde accidental (ilegible). 1.515

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 27 de septiembre de 1974:

Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.

Se concedieron diversas licencias de obra.

Se dio autorización para proceder a la acometida domiciliaria de aguas en vivienda sita en Renedo.

Se aprobó la relación de facturas número 17.

Por razones de urgencia se acordó tratar el siguiente asunto no incluido en el orden del día:

El contratar directamente las obras de reparación de cocina de la vivienda de los señores maestros de Zurita, como caso comprendido en los números 3 y 6 del artículo 41 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.

El secretario (ilegible).—El alcalde accidental (ilegible). 1.514

Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada en primera convocatoria el día 19 de octubre de 1974:

Se acordó interponer recurso de alzada ante el Ministerio de la Vivienda contra acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo rechazando el Plan Parcial de Liencres.

El alcalde (ilegible).—El secretario (ilegible). 1.640

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 4 de abril de 1975:

Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.

Se otorgaron licencias de obras a don Marcelino Mendiguchía San Emeterio para la construcción de un cierre en un terreno de su propiedad sito en Oruña, y a don José Bolado Fernández para construir una nave destinada a almacén en Puente Arce.

Se concedieron acometidas domiciliarias de agua a don Isidoro Hornedo Isla y a don Mauricio Riancho Peña.

Se aprobó la cuenta de caudales correspondiente al primer trimestre del presente año.

Aprobación de facturas número 11 por un importe total de 198.661 pesetas.—El alcalde (ilegible).—El secretario (ilegible).

666

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Don Francisco Javier Oria Fernández solicita licencia municipal para el ejercicio de actividad de carnicería con cámara frigorífica para conservación de carnes frescas en la localidad de Solares, Avenida de Calvo Sotelo.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre

de 1961 y artículo 4.º 4.ª de la O. M. de 15 de marzo de 1963, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar de la inserción del presente edicto en el tablero de avisos de este Ayuntamiento.

Medio Cudeyo a 11 de diciembre de 1975.—El alcalde (ilegible). 2.255

AYUNTAMIENTO DE REINOSA

Don Luis Rojo Esteban solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de instalación de un tanque metálico de 5.000 litros de capacidad destinado a almacenamiento de gasóleo para consumo propio, en calle de la Pella, número 3.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación sobre actividades molestas, nocivas y peligrosas, se hace público, para que quienes pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar de la inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Reinosa a 29 de diciembre de 1975.—El alcalde (ilegible).

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

Don Fernando Senach Garrido, alcalde - presidente del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna,

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 del actual, aprobó el proyecto de contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local, con las siguientes características:

Primera.—El importe de la cifra es de 8.107.621 pesetas, con destino a las obras de saneamien-

to de los pueblos de Los Corrales y Somahoz.

Segunda.—Los intereses que devengarán los saldos deudores de esta cuenta será del 8,25 por 100 anual, más el 0,05 por 100 trimestral de comisión, sobre mayor saldo dispuesto, y el 1 por 100 anual sobre las cantidades no dispuestas del crédito.

Tercera.—El importe del préstamo habrá de amortizarse en el plazo de diecinueve años, mediante cuadro de amortización, que será confeccionado al efecto, y a partir del cierre de la cuenta general del crédito.

En garantía, queda afectada la participación del 90 por 100 de la contribución territorial urbana y participación del 80 por 100 de la licencia fiscal del impuesto industrial.

Asimismo, queda aprobado proyecto de contrato de préstamo a medio plazo, reintegrable en cinco años, como anticipo a las contribuciones especiales, por el 80 por 100 del importe de éstas, lo que supone la cantidad de pesetas 8.749.386, con el siguiente tipo de interés: 7,75 por 100 para los saldos deudores, 0,05 por 100 trimestral sobre mayor saldo dispuesto y 1 por 100 anual sobre las cantidades no dispuestas del crédito concedido.

Lo que se hace público por espacio de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 780,3 de la vigente Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955.

Los Corrales de Buelna a 24 de diciembre de 1975. — El alcalde, Fernando Senach Garrido 2.300

"BOLETIN OFICIAL" DE LA PROVINCIA DE SANTANDER TARIFAS

	Ptas.
Suscripción anual	350
Suscripción semestral	200
Suscripción trimestral	100
Núm. suelto del año en curso	3
Núm. de años anteriores	5
Inserciones.—Cada palabra ...	2

(El pago de las inserciones se verificará por adelantado.)